



Informe sobre el conflicto armado en el Oriente antioqueño entre la movilización social y la guerra



Fabián Emilio
Restrepo García



Conciudadanía
Para que los derechos sean hechos

Informe sobre el conflicto armado en el Oriente antioqueño entre la movilización social y la guerra

Fabián Emilio Restrepo García

Politólogo

Universidad de Antioquia

Magíster en Estudios Contemporáneos de América Latina

Universidad Complutense de Madrid

Informe sobre el conflicto armado en el Oriente antioqueño entre la movilización social y la guerra

ISBN: 978-958-56044-8-3 (versión impresa)

Primera edición, marzo de 2022

Investigador:

Fabián Emilio Restrepo García

Corrección de textos:

Jhon Hélber Rodríguez

Corrector de estilo:

Juan David Villa Rodríguez

Diagramación:

Ana Milena Gómez Correa

Fotos portada:

Juliana Arango

Fotos interior:

David Sánchez, Promedios Audiovisuales

Publicado por:

Corporación Conciudadanía.

Medellín – Colombia

Todos los derechos reservados

La presente publicación ha sido realizada por la Corporación Conciudadanía gracias al apoyo financiero de Pan Para el Mundo y el Fondo Noruego para los Derechos Humanos, en el marco del proyecto: Memorias que Unen. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Conciudadanía y no necesariamente refleja el pensamiento de las entidades que financian.



A las víctimas del Oriente antioqueño.

Contenido

Introducción	11
---------------------------	----

El conflicto en el Oriente de Antioquia

<i>Una mirada conceptual a un fenómeno complejo</i>	15
---	----

De poblados dispersos a luchas regionales	20
--	----

Primera parte del conflicto en el Oriente antioqueño, sus procesos de colonización y los cambios en su vocación productiva	20
--	----

Primer ciclo de violencia

El movimiento cívico del Oriente antioqueño: primera fase de conflictividad social	23
---	----

Segundo ciclo de violencia

Los actores del conflicto armado en el Oriente antioqueño	28
---	----

La guerra por el Oriente antioqueño: guerrillas y paramilitares	29
---	----

Toma de poblaciones: la huella de las FARC en el Oriente antioqueño	33
---	----

El conflicto entre las guerrillas: la persecución armada de las FARC al ELN y sus consecuencias en el fortalecimiento paramilitar	38
--	----

El ELN y su proceso de construcción desde las bases populares en el Oriente antioqueño	39
---	----

La arremetida paramilitar: la reconfiguración del territorio	43
--	----

Tercer ciclo de violencia

La guerra entre paramilitares: confrontación entre el Bloque Metro y el Bloque Héroes de Granada	49
La otra cara del conflicto en el Oriente antioqueño	56
El papel de las víctimas en la resistencia al conflicto y la recuperación del territorio	56
Conclusiones	64
Referencias bibliográficas	67

Mapas

Mapa 1. Frentes de las FARC en el Oriente antioqueño	28
Mapa 2. Tomas a pueblos realizadas por las FARC y corredores de movilidad....	35
Mapa 3. Frentes del ELN en el Oriente antioqueño	39
Mapa 4. Bloques paramilitares en el Oriente antioqueño	42
Mapa 5. Incurción Bloque Héroes de Granada al Oriente antioqueño	49
Mapa 6. Corredores de movilidad en el Oriente antioqueño	50

Gráficos

Gráfico 1. Acciones unilaterales de las FARC	29
Gráfico 2. Acciones unilaterales del ELN	40
Gráfico 3. Acciones unilaterales de los paramilitares	45
Gráfico 4. Masacres paramilitares	45
Gráfico 5. Homicidios en zonas de control del BHG.....	49
Gráfico 6. Homicidios 2000.....	51
Gráfico 7. Homicidios 2007.....	51
Gráfico 8. Operaciones militares en el Oriente antioqueño	52

Introducción

En el marco del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC el 29 de noviembre del año 2018 se dio inicio formal al mandato de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) para aportar al entendimiento de lo ocurrido en el país tras más de medio siglo de conflicto armado, además de presentar recomendaciones para la no repetición y la reconciliación. Durante los tres años en los que la CEV deberá construir el *Informe de la verdad* podrá recibir aportes de los diferentes sectores de la sociedad, tanto de aquellos que hayan participado directamente en las confrontaciones (militares, paramilitares y guerrilleros) como de aquellos grupos civiles, ONG y organizaciones de víctimas que a lo largo y ancho del país han trabajado por esclarecer los múltiples fenómenos de la violencia y rescatar la memoria como un elemento fundamental que garantice la no repetición.

Es en este sentido que Conciudadanía ha trazado la meta de contribuir a la labor de la Comisión de la Verdad desde su experiencia de más de 30 años de trabajo con las comunidades de las regiones de Antioquia; se destaca el impulso y acompañamiento al movimiento social, a la construcción social del territorio y a los procesos organizativos de la región, entre ellos las asociaciones de víctimas y las expresiones ciudadanas que se han resistido a la guerra y han trazado alternativas de paz y reconciliación. El presente informe sobre el conflicto armado aborda lo ocurrido y la labor de las organizaciones sociales en una región que llegó a ser la segunda en número de víctimas en todo el país y cuya complejidad política, económica y social reviste un caso paradigmático a la hora de comprender el conflicto.

Las cifras que deja el conflicto armado en el Oriente antioqueño muestran la magnitud de las confrontaciones: entre los años 1985 y 2017 se registraron 15.000 muertes fuera de combate (civiles asesinados por fuera de acciones militares) y unas 54.823 personas fueron desplazadas del territorio entre 1999 y 2006. Esta región llegó a ser, asimismo, el segundo territorio del país en número de personas

desplazadas y muertes violentas asociadas a los actores armados entre 1997 y 1999, lo que demuestra el accionar militar de los grupos legales e ilegales que hicieron presencia en el territorio.

Estas desalentadoras cifras dan cuenta de la importancia que revestía el territorio para los actores del conflicto; desde la década de 1960 el Oriente de Antioquia se perfilaba como una de las regiones de mayor importancia económica para el departamento por su riqueza hídrica y de minerales estratégicos, además de su ubicación privilegiada entre los corredores del Magdalena Medio y Nordeste de Antioquia y los departamentos de Caldas y Tolima, que fueron utilizados como zonas de retaguardia por los grupos guerrilleros y de movilidad de narcóticos por los paramilitares.

Para entender el conflicto librado por este territorio y en este territorio se deben tener presentes los factores de la guerra y la disputa por los recursos, que han estado en la historia de la región y han determinado el territorio. Estas disputas se han expresado en tres ciclos de conflictos que van desde la década de 1960 hasta nuestros días; se trata de conflictos diferenciados entre sí, pero cuya existencia ininterrumpida devela situaciones no resueltas y tensiones constantes entre los actores, quienes, por cierto, han ido cambiando con los años.

Es posible ubicar tres grandes bloques en la historia del Oriente que marcan la configuración y reconfiguración del territorio, en los cuales las tensiones entre la movilización social y la guerra van y vienen como parte de un ciclo de violencias que se encadenan una tras otras.

- La llegada de los megaproyectos, el Oriente es visto como región y primeras expresiones de conflictividad.
- Confluencia de guerrillas y paramilitares.
- La narcotización del conflicto en el Oriente antioqueño, nuevos actores y nuevas guerras.

En cada uno de esos periodos las relaciones entre población, grupos económicos, actores políticos y grupos armados se presentó de forma particular y configuró vín-

culos que terminaron por marcar el surgimiento del siguiente periodo de disputas. Sin embargo, no solo la guerra y la disputa por los recursos han marcado la historia de la región: la capacidad organizativa de su población, las diversas expresiones de resistencia civil a la guerra, las organizaciones de víctimas y los ejercicios de memoria también han definido la historia del territorio.

Las acciones llevadas a cabo desde la sociedad civil han estado en el centro de las disputas por el territorio; sus luchas por visibilizar las acciones de los grupos armados, por rescatar los valores culturales de las poblaciones y su oposición a la implementación de algunos megaproyectos han jugado un papel importante en la historia del Oriente.

Así que este informe quiere dar cuenta de los tres ciclos del conflicto desde una mirada cronológica y clasificada según los actores que han hecho presencia en la región, buscando elaborar un relato organizado que exponga los momentos del conflicto. De igual manera, detalla con especial atención las dinámicas territoriales de expansión de los grupos armados para entender mejor cómo se libraron los conflictos por los territorios. La construcción de este relato se basa en un ejercicio de revisión documental, con informes y crónicas que distintos actores institucionales y de la sociedad civil han venido elaborando en la región.

Para este informe es de gran importancia resaltar la valerosa labor de las diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos, organizaciones de víctimas y colectivos en defensa del territorio, que han hecho presencia en los municipios del Oriente antioqueño y con los cuales Conciudadanía ha venido trabajando desde hace muchos años.

Finalmente, este documento es construido tomando como referencia los siguientes procesos de memoria y verdad, con el apoyo de Conciudadanía, por diferentes colectivos locales: *De historias particulares a memorias locales, apuntes para la memoria*, El Carmen de Viboral (2012); *Apuesta por la memoria, experiencias acompañadas por Conciudadanía en municipios de Antioquia* (2013); *Del horror de la guerra a la Noviolencia*, Caicedo (2016); *Una verdad que perdura en el tiempo*, Cañasgordas

(2016); *Un camino a la verdad, construcción de memoria colectiva de las víctimas del conflicto armado del municipio San Luis, las tomas guerrilleras en el corregimiento El Prodigio* (2018); *Sonsón, memoria viva* (2019); *Un pueblo que se juntó para salvar vidas en la guerra: Consejo de Conciliación y Desarrollo Social de San Luis* (2020).

Foto: David Sánchez, Promedios Audiovisuales.



El conflicto en el Oriente de Antioquia

Una mirada conceptual a un fenómeno complejo

Escribir sobre el conflicto armado en Colombia supone unos retos teóricos y conceptuales de importancia en la búsqueda de herramientas interpretativas que permitan comprender la diversidad de los actores que han intervenido en aquel, los momentos e intensidades e, incluso, el cambio de las razones y motivaciones de los grupos armados; todo esto demanda la construcción de un marco interpretativo que facilite la lectura de las realidades a la luz de conceptos capaces de captar la complejidad del conflicto colombiano.

No es esta una situación exclusiva del caso colombiano: de hecho, a partir del fin de la Guerra Fría y producto del surgimiento de múltiples expresiones bélicas y de violencia organizada en el mundo entero, se hizo necesario reconstruir el marco conceptual sobre la guerra y los conflictos armados con el fin de hallar matrices interpretativas que permitieran el estudio de fenómenos como la violencia tribal o étnica de África y Europa del este, los conflictos asociados al narcotráfico en algunos países de Occidente y las violencias nacionalistas de algunos países del África subsahariana y América Latina.

En este sentido, resulta importante reconocer la guerra en cuanto actividad humana como un elemento cambiante, adaptable a las situaciones históricas, una situación condicionada por las realidades sociales, económicas, políticas, culturales y tecnológicas que, a su vez, influye en los cambios estructurales de las sociedades. Así las cosas, la guerra está limitada por las realidades del contexto, pero recrea nuevos escenarios y dinámicas sociales.

Entender la guerra como un elemento dinámico en la historia permite trazar una línea interpretativa tanto de los fenómenos históricos como de los conceptos y

teorías que se han utilizado para interpretarlos. Quizás una de las formas más simples, y a su vez esclarecedoras, de hacer dicho recorrido sea a través de los actores que intervienen en la guerra, lo cual ayuda a encontrar regularidades, permanencias y rupturas.

Los estudios sobre la guerra estuvieron íntimamente ligados a la confrontación librada entre Estados en la configuración del orden mundial. Sin embargo, ante el auge de los conflictos de liberación nacional en el norte de África y los conflictos de carácter guerrillero en América Latina durante la década de 1960, y ante el declive de la Guerra Fría, algunas décadas más adelante se hizo necesario vincular nuevos elementos de análisis que permitieran entender las confrontaciones armadas libradas dentro de los Estados, y ya no exclusivamente entre ellos.

Así, durante la segunda mitad del siglo XX, y en particular pasada la Segunda Guerra Mundial, los conflictos armados en el mundo contaron con un importante componente dentro de las fronteras de los Estados: las violencias guerrilleras y paramilitares fueron ocupando paulatinamente un lugar fundamental tanto en las confrontaciones como en los desarrollos conceptuales y teóricos que pretendían estudiarlas. Pese a que los nuevos actores no podían ser catalogados como actores estatales, el Estado no perdió su lugar central en el desarrollo de los conflictos.

En este sentido, los conflictos armados deben ser entendidos como actividad social: son en esencia un acto político a merced de las actuaciones del Estado o los grupos que se le oponen, lo que significa que la guerra no existe por la sola inercia de la guerra misma, sino por la política y los objetivos que se trazan los actores que entran en disputa y cuya motivación esencial es ocupar el centro del poder político. De esta manera se presenta una estrecha conjunción en los conflictos convencionales y los conflictos internos entre violencia y política, en la cual no solo intervienen los actores estatales, también lo hacen los grupos contra- y paraestatales.

La centralidad de los intereses políticos de los actores resulta un elemento en común entre los conflictos convencionales entre Estados y los conflictos internos: en ambos tipos de confrontaciones la guerra deviene un instrumento en la búsqueda de objetivos políticos. Otro elemento común entre ambos tipos está dado por los altos

costos y la demanda de movilización de recursos (la actividad de la guerra requiere de una gigantesca movilización de recursos humanos y materiales).

Todos los actores que intervienen en los conflictos se ven enfrentados a resolver las dificultades técnicas y económicas que supone la actividad bélica; sin embargo, la forma en que estos retos económicos son asumidos marca importantes diferencias entre aquellos. El Estado resulta el principal actor en términos de acceso a recursos y capacidad para el despliegue de tropas y recursos técnicos; en tanto los actores contraestatales e incluso paraestatales se ven en la obligación de recurrir a fuentes de financiación ligadas a los mercados ilegales de drogas y recursos naturales o actividades de constreñimiento a la población, como la extorsión y el secuestro.

Pese a la centralidad del Estado en el acceso a recursos y su posicionamiento privilegiado en términos de discurso y legitimidad, durante la segunda mitad del siglo XX algunos Estados de África, América Latina, Asia y el este de Europa presenciaron serios procesos de debilitamiento como resultado del surgimiento de conflictos internos, el avance del neoliberalismo y el fin de la Guerra Fría. Esos procesos de debilitamiento vinieron acompañados por una pérdida importante del monopolio de la violencia legítima y el uso de la fuerza, lo que posibilitó el fortalecimiento de los actores contraestatales y paraestatales en los conflictos internos.

Con este debilitamiento del Estado, la expansión del neoliberalismo y la consecuente ampliación de los mercados de materias primas y recursos estratégicos, y el fortalecimiento del narcotráfico, surge un nuevo tipo de actores armados capaces de disputar la soberanía del Estado y, por ende, de modificar el escenario de los conflictos internos. Esos cambios implican, según Mary Kaldor (2001, p. 16), una transformación de las distinciones entre guerra, crimen organizado y violaciones a gran escala de los derechos humanos; estos nuevos conflictos son diferenciables principalmente en cuanto a (i) objetivos de la guerra, (ii) métodos de lucha y (iii) métodos de financiación.

En el mismo sentido señalado por Kaldor, Herfried Munkler (2005) señala la necesidad de reconceptualizar por lo menos tres elementos en los escenarios de las nuevas guerras.

En primer lugar, la desestatalización o privatización de la violencia bélica; en segundo lugar, la asimetría de la violencia bélica, o sea, el hecho de que por regla general no luchan entre sí contendientes comparables; y, en tercer lugar, una paulatina independización o autonomización del carácter militar, que significa que los ejércitos regulares han perdido control sobre el acontecer bélico, control que en gran parte ha caído a manos de actores de violencia que no son homólogos entre sí (Munkler, 2005, p. 75).

En suma, la debilidad del Estado, el fortalecimiento de las economías ilegales, la privatización de la violencia, la asimetría bélica y la independización de los componentes militares en algunos de los actores han marcado una paulatina desaparición de las motivaciones políticas en el transcurrir de las nuevas guerras a favor del componente económico, lo que ha dado cabida al surgimiento de importantes estructuras armadas cuya finalidad es económica, pero que conservan la capacidad de controlar territorios, ejercer dominio sobre la población y enfrentar al Estado.

Los procesos de transformación de los conflictos armados son el resultado de los cambios en las dinámicas sociales, políticas y económicas en las que se desarrollan; a su vez, la existencia de esos conflictos determina en gran medida las nuevas realidades, precisamente, sociales, políticas y económicas; por lo tanto, los conflictos armados deben ser entendidos como agentes esenciales en la configuración y reconfiguración de los territorios.

En este sentido, es importante reconocer la naturaleza móvil de las configuraciones territoriales, en el entendido de que por territorio nos referimos a los procesos sociales que se llevan a cabo en una porción geográfica determinada; esto es, entender el territorio en función de las relaciones humanas que en él se tejen. Por lo tanto, al hablar de configuración territorial hacemos aquí referencia a los tres elementos señalados por Agnew y Oslender (2010) como constitutivos del “lugar”:

- Los marcos físicos o escenarios donde se constituyen las interacciones cotidianas en función de lo que allí toma lugar.
- La localización, entendida como el marco geográfico que comprende los distintos escenarios de la interacción social y que se define en función de la

división general del trabajo, de las condiciones del desarrollo desigual y de la interacción con procesos que operan en escalas espaciales más amplias.

- La orientación subjetiva de las identidades constituidas en el vivir allí en particular.

Los procesos sociales que se desarrollan en los marcos geográficos son los que le dan alcance al surgimiento de los territorios; en este sentido, si bien la guerra constituye uno de esos procesos sociales, no deviene el único, y otras expresiones sociales interactúan con las confrontaciones bélicas y le otorgan un sentido particular a la significación de los territorios. La resistencia social a la guerra por medio de acciones simbólicas y de construcción de memoria es una herramienta de alcance político de gran importancia para la reconfiguración de las identidades y, por tanto, de los territorios.

Así las cosas, comprender los orígenes, desarrollo y consecuencias del conflicto armado en el Oriente antioqueño demanda un análisis a diferentes niveles y direcciones en el cual se logre entender las relaciones existentes entre los procesos sociales y económicos de la región con el surgimiento y evolución de las dinámicas bélicas en sus territorios; un ejercicio de esta naturaleza demanda, además, reconocer en el conflicto un fenómeno fundamental para la conformación y desarrollo de la región, uno que no se ha presentado uniformemente, sino que muestra disparidades que se hallan en su base misma y en su desarrollo.

Foto: David Sánchez, Promedios Audiovisuales.



De poblados dispersos a luchas regionales

Primera parte del conflicto en el Oriente antioqueño, sus procesos de colonización y los cambios en su vocación productiva

El proceso de colonización del Oriente no sigue una dinámica constante y lineal; de hecho, responde a un proceso disperso y fragmentado en el cual colonos provenientes de varias regiones del país se van asentando para construir así un proceso que marca importantes diferencias en el desarrollo temprano de los municipios de la región.

En términos de configuración territorial, el Oriente antioqueño se ha conformado a partir de dos bloques: por un lado, el denominado Oriente cercano, con los nueve municipios del altiplano, y, por el otro, el denominado Oriente lejano, con los restantes 14 municipios de las zonas de bosques, páramos y embalses. Los procesos de colonización en estas dos territorialidades son diferentes y marcan el inicio de una dinámica centro-periferia que se mantiene hasta nuestros días.

Los municipios del altiplano surgen en los años de la Colonia; Rionegro y Marinilla se configuran como importantes centros urbanos desde los cuales se jalona el poblamiento de los demás poblados y se proyectan como importantes lugares en la vida política y económica del departamento. Por su parte, el proceso de colonización del Oriente lejano presenta dos momentos esenciales: a finales del siglo XIX, los márgenes del sur del Oriente antioqueño tienen un aumento en los procesos de poblamiento, con epicentro en el municipio de Sonsón; las rutas de comercio entre Antioquia y el centro del país potenciaron el crecimiento demográfico. El segundo ciclo de colonización en los municipios alejados de Medellín y de la zona del altiplano se produce en la década de los 50, impulsado por la violencia partidista y bajo la promesa de ampliar la frontera agraria; al territorio llegan campesinos sin tierra a poblar los municipios de bosques, paramos y embalses, instalando allí una vocación agraria.

Así las cosas, los municipios del altiplano han tenido un proceso de crecimiento significativo desde los años de la Colonia, que se traduce en un crecimiento demográfico importante acompañado de una importante red de infraestructura y crecimiento económico. El Oriente lejano presentó un proceso de colonización incipiente en la primera mitad del siglo XX, marcado por la llegada de campesinos sin tierra que expandieron la frontera agraria en los territorios más alejados e instauraron una vocación agraria de subsistencia, sin que ello se tradujera en un aumento importante en la demografía ni en la oferta de servicios presentes en los municipios más alejados de Medellín y del altiplano.

Durante la primera mitad del siglo XX, el Oriente antioqueño no es entendido como región ni por sus pobladores ni por las élites políticas y económicas; se trata de dos territorialidades diferentes y apartadas entre sí que no guardan una relación ni histórica ni de intercambios comerciales que logre un reconocimiento institucional en los imaginarios de sus pobladores. El Oriente estaba conformado por una región cercana a la ciudad de Medellín, con un crecimiento poblacional y presencia institucional más o menos eficiente, más un cúmulo de poblaciones dispersas, alejadas y con baja presencia institucional, desintegradas de las dinámicas económicas del departamento y la nación, constituidas en su mayoría por pequeños productores campesinos.

Esta situación comienza a cambiar sobre la década de 1950, con la proyección de las primeras megaobras en la región: los complejos hidroeléctricos Guatapé/San Rafael/San Carlos, la construcción de la autopista Medellín-Bogotá y del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro. Estas megaobras ponen al Oriente antioqueño en las agendas de las élites políticas y económicas del país y del departamento, y dan inicio a una serie de conflictos sociales que marcarían la historia de la región durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI. No obstante, la idea de región generada por la proyección e implementación de los megaproyectos y la explotación de recursos no va a ser la misma entre los pobladores de la región y las instituciones que las ejecutarán.

Por un lado, los megaproyectos ejecutados durante las décadas de 1950 y 1960 marcaban una importante conexión entre los territorios alejados y los centros de

desarrollo urbano. La autopista Medellín-Bogotá atravesaba la región en su totalidad y lograba una proyección en la conectividad terrestre de los municipios de la zona bosques con el altiplano y Medellín. Así Sonsón, que hasta la construcción de la autopista era el paso obligado de personas y mercancías desde el centro y hacia el centro del país, quedaba por fuera del eje de movilidad y se establecía una nueva ruta que, además, lograba conectar las zonas de interés minero, como el cinturón cáustico de San Luis y San Francisco, con las zonas de mayor crecimiento urbano del departamento (el área metropolitana y los municipios del Oriente cercano).

Además, el desarrollo del complejo hidroeléctrico Guatapé/San Rafael/San Carlos incorporó esos municipios en las agendas de importantes empresas de servicios, como EPM, quien trasladó buena parte de su capacidad generadora de electricidad al Oriente. Para la década de 1970, la región ya producía más del 24 % de la energía que consumía el departamento y el 12 % de la nación, gracias a lo cual se convirtió en una zona de valor estratégico para el país.

Para empresas y sectores políticos, el Oriente antioqueño aparece en sus agendas bajo una visión estrictamente económica, sin mayor planificación territorial y sin tener en cuenta las dinámicas sociales y culturales de los habitantes de los territorios, quienes con el tiempo vieron cambiar sus formas tradicionales de existencia por la implementación de los nuevos megaproyectos.

Los impactos socioeconómicos generados por la implementación de los megaproyectos, el despojo y el desplazamiento de la población y el aumento en los costos de vida para los habitantes de los municipios en los que se desarrollaban aquellos propiciaron el surgimiento de una importante movilización social, que por primera vez en la historia del Oriente lograba conformar entre sus habitantes una idea unificada de región. El movimiento cívico se configuró en esa expresión de base ciudadana que logró, por primera vez, conectar las demandas de los habitantes de las zonas de la región.

Primer ciclo de violencia

El movimiento cívico del Oriente antioqueño: primera fase de conflictividad social

A finales de la década de 1960 y durante las décadas de 1970 y 1980, los gobiernos nacional y departamental impulsaron la construcción del complejo hidroeléctrico / Playas/Jaguas/Calderas/Tafetanes, ubicado entre los municipios de El Peñol, Guatapé, San Rafael, San Carlos y Santo Domingo; la construcción de esta serie de hidroeléctricas estuvo a cargo de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y de Interconexión Eléctrica S. A. (ISA). Los impulsores del proyecto eléctrico en Antioquia eligieron el Oriente del departamento debido a la disposición adecuada de los terrenos por sus pendientes, la existencia de abundantes fuentes de agua y la posibilidad de adquirir las tierras necesarias a bajos costos, lo que, a su vez, aumentaba la capacidad para producir kilovatios/hora también a bajos costos (Olaya, 2016, p. 129).

Estas obras contaron con el impulso de los sectores políticos y económicos del país y el departamento, pero no estuvieron exentas de conflictos entre las empresas que las desarrollaban y los pobladores de las zonas en las que se construían las represas; tales conflictos marcaron a la postre las dinámicas sociales y políticas de los municipios y arrojaron como resultado el desplazamiento y asesinato de muchas de las personas que se oponían. Tal fue el caso del médico Demetrio Galeano Jácome, asesinado el 19 de octubre de 1965, dueño de una importante extensión de tierras a las orillas del río Nare y quien se había negado a vender sus tierras a EPM para la realización del proyecto embalse Guatapé (Olaya, 2016, p. 130).

Las movilizaciones sociales de los pobladores no lograron establecer canales adecuados de diálogo con las empresas y las autoridades. Un caso particular ocurrió en el municipio de El Peñol.

La construcción de la hidroeléctrica de Guatapé acarreó la inundación de una extensa área agrícola al igual que el casco urbano de El Peñol, ante lo cual, las Empresas Públicas de Medellín firmaron con los concejos municipales de El Peñol y Guatapé un Contrato Maestro, elevado este a escritura pública N° 175 de abril 12 de 1969, mediante el cual EPM se comprometió a reparar los daños ocasionados con las obras e indemnizar a los afectados.

Además, entre otras cláusulas, quedó establecido que dos años antes de la inundación debían estar las casas del nuevo Peñol construidas y habitables. Sin embargo, para la fecha de la inundación definitiva, los pobladores denunciaron que ni siquiera las vías públicas se habían construido (Olaya, 2016, p. 132).

Pese al incumplimiento de los compromisos adquiridos por EPM y las múltiples movilizaciones de los pobladores de El Peñol y Guatapé, el llenado definitivo del embalse se inició en 1978, sin importar que algunos habitantes del municipio aún no abandonaban sus viviendas. La última fase del desalojo del municipio de El Peñol se convirtió en un hecho para evitar una tragedia humanitaria. Estas situaciones demuestran la falta de diálogo y coordinación entre las comunidades, las empresas y las autoridades, lo que se tradujo en un aumento de la movilización social.

La inconformidad de los pobladores de El Peñol y Guatapé debido a la imposición de esta megaobra por encima del querer de toda una comunidad y las maneras propias de habitar el territorio por parte de los campesinos propició el surgimiento de un fuerte movimiento cívico, que canalizó la voz de los afectados.

Lo que sucedía en El Peñol y Guatapé puso sobre aviso a los habitantes de San Carlos, al saber que allí el Gobierno nacional, a través de ISA, emprendería la construcción de la hidroeléctrica de mayor capacidad instalada del país. Por eso también se conformó, en esta localidad, un fuerte movimiento cívico, a través del cual se presentaron reclamaciones, acompañadas de grandes movilizaciones, para exigir indemnizaciones, compensaciones, reubicaciones y planes de mitigación por los perjuicios causados, al igual que participación en los espacios donde se tomaban las determinaciones sobre la destinación de los recursos públicos, los cuales eran manejados de manera fraudulenta por los políticos de turno (Olaya, 2016, p. 135).

El desarrollo de las obras y de los procesos de inundación de grandes extensiones de territorio impulsó la movilización de campesinos y habitantes de los municipios directamente afectados; estas fueron las bases del movimiento cívico, las primeras expresiones de descontento y movilización. Sin embargo, su alcance no lograba cobijar a toda la región: su capacidad de convocatoria se restringía a los municipios del cordón hidroeléctrico.

Pero fue la implementación de un modelo de tercerización en la administración y cobro de los servicios de energía lo que logró expandir la movilización cívica a todos los municipios del Oriente antioqueño. En el proceso de tercerización fue creada la Empresa Electrificadora de Antioquia S. A., que compraba la electricidad en bloque a EPM y la revendía a los municipios que se encontraban por fuera del área metropolitana, lo cual servía para dispersar las responsabilidades frente a la calidad de la prestación del servicio y aumentaba significativamente los costos de las facturas del servicio para los habitantes del Oriente.

Pese a que la región se perfilaba como una de las principales productoras de electricidad del país, la capacidad para la prestación de un servicio de calidad en su jurisdicción era, para la época, bastante limitada, lo cual se traducía en dificultades de conectividad y, por supuesto, cobro de facturas. La Empresa Electrificadora de Antioquia S. A. buscaba garantizar la rentabilidad del negocio y para 1981 anunció un alza gradual de hasta un 35 % en las facturas de la luz. Esta medida empezó a materializarse en 1982 con un alza del 9 % que generó un gran malestar entre los habitantes del Oriente, y hubo asambleas populares para decretar el no pago de las cuentas.

Así nació el movimiento cívico del Oriente, con asambleas en toda la región que lograron una movilización social efectiva, la misma que se materializó en tres paros generales a finales de la década de 1980. El movimiento cívico fue, entonces, el resultado del malestar social de los municipios donde se ejecutaron las obras para la construcción de hidroeléctricas, a lo que se sumó el descontento generalizado por la mala calidad y los altos costos del servicio de electricidad.

Sin embargo, el accionar del movimiento no se limitó a ello y las diferentes expresiones fueron tomando tanta fuerza en algunos municipios que sirvieron de

base para que surgieran propuestas políticas alternativas a las de la clase política tradicional. Así, según lo plantea la profesora María Teresa Uribe, lo importante del movimiento cívico en el Oriente de Antioquia es que logró disputarles el poder político a los gamonales tradicionales, quienes no contaban con la capacidad para ofrecerles alternativas a los habitantes, puesto que sus decisiones fueron las que a la larga crearon los problemas (Uribe, 2001).

En medio de un contexto político nacional convulsionado por la sistemática persecución y exterminio del movimiento político UP (Unión Patriótica) a manos de ejércitos paramilitares, no faltó mucho tiempo para que los líderes del movimiento cívico del Oriente entraran en el radar de las fuerzas de exterminio. La persecución llevó al asesinato y desplazamiento de casi la totalidad de los líderes municipales y regionales: según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2020), entre 1983 y 1994 fueron asesinados 224 líderes del movimiento cívico del Oriente antioqueño. Por su parte, el número total de desplazados es difícil de determinar, pues para la época no se llevaban estadísticas de este flagelo y muchas de las familias optaban por no denunciar ante el temor y la desconfianza con las autoridades de Policía. En fin, lo cierto es que el movimiento cívico fue exterminado totalmente por actores armados cuyos intereses se encontraban muy cercanos a los de las empresas, políticos y sectores económicos vinculados a los poderes tradicionales de la región; estos poderes tradicionales vieron amenazadas sus posiciones de privilegio ante la gran acogida que estaba logrando el movimiento.

En la historia del Oriente antioqueño el movimiento cívico resulta un hito de gran importancia por varias razones. Primero, esta movilización social logró instaurar, como ya se dijo, una idea de región en los habitantes de los 23 municipios, configurando así lo que Agnew y Oslender (2010) denominaba *la orientación subjetiva de las identidades constituidas en el vivir allí en particular*, esto es, una concepción socialmente aceptada sobre la territorialidad. Las demandas del movimiento les demostraron a los habitantes que tenían muchos problemas comunes en infraestructura y prestación de servicios públicos, y expusieron la existencia de una clase política y empresarial que no buscaba mejorar la calidad de vida de las gentes del Oriente antioqueño.

Segundo, el movimiento encarna la primera gran conflictividad entre un modelo de desarrollo extractivista, pensado y ejecutado desde afuera de la región, y los habitantes de los territorios con sus prácticas productivas y culturales amenazadas por la implementación de los megaproyectos. Tercero, y de gran importancia para comprender las dinámicas armadas de la región: el exterminio que vivió el movimiento cívico representó el accionar político-militar de las élites en contra de la movilización social y la participación en las elecciones locales.

El surgimiento, existencia y exterminio del movimiento cívico puede ser visto como un fenómeno bisagra, por su temporalidad e importancia, entre el conflicto social surgido en la región entre las décadas de 1970 y 1980 y el ingreso a ella de las guerrillas y los paramilitares. En este sentido, el exterminio puede ser entendido como una acción de grupos armados cuya motivación era evitar la pérdida del poder de los gamonales y élites económicas que controlaban el Oriente; esto es, una acción de guerra con un tinte político que marca el inicio de las confrontaciones.

Foto: David Sánchez, Promedios Audiovisuales.



Segundo ciclo de violencia

Los actores del conflicto armado en el Oriente antioqueño

En la primera mitad del siglo XX la región se vio enfrentada a importantes cambios en su vocación económica; su proyección como región estratégica para el departamento de Antioquia la puso en la agenda de los intereses económicos y políticos de las élites nacionales y regionales; y estas, en alianza con los poderes locales, impulsaron con éxito la construcción de grandes obras de infraestructura, como las ya mencionadas complejo hidroeléctrico Guatapé/San Rafael/San Carlos, autopista Medellín-Bogotá y Aeropuerto José María Córdova. Los cambios vividos por la región durante estos años también modificaron las relaciones políticas y socioculturales de sus pobladores con su territorio: ya para las décadas de 1960 y 1970 el Oriente era visto por sus pobladores como una región única y no como poblados dispersos con pocas relaciones entre sí.

Pero este proceso de consolidación como región no estuvo exento de la presencia de grupos armados: desde la década de 1970 la zona era utilizada como escenario de retaguardia por algunos grupos guerrilleros, e, incluso, el accionar paramilitar ya se había hecho sentir mediante la persecución y exterminio de los militantes y líderes del movimiento cívico. Sin embargo, fue en las décadas de 1980 y 1990 cuando los diferentes grupos asumieron una postura más activa y consolidaron a la región del Oriente antioqueño como teatro de operaciones militares.

Con algunas diferencias temporales y territoriales, la historia del conflicto armado en el Oriente se vio marcada por seis actores principales: las guerrillas de las FARC y el ELN, los grupos paramilitares de las ACMM, el BM y el BHG, y las FF. MM.; cada uno con particularidades en sus apariciones en la región, sus rutas de expansión territorial y el despliegue de sus acciones.

En la primera fase del conflicto armado en el Oriente, los actores enfrentados contaban con una clara postura ideológica y programas políticos que marcaban sus

canales de relacionamiento con la población y las élites políticas y económicas tanto de la región como del departamento y la nación. Se trata de un conflicto armado clásico en el cual se presenta una clara relación entre los objetivos, los métodos y las fuentes de financiación, según la clasificación ofrecida por Mary Kaldor (2001, p. 16).

Esta realidad fue modificada drásticamente con la derrota del Bloque Metro (BM) a manos del Bloque Cacique Nutibara y la conformación en el Oriente del Bloque Héroes de Granada (BHG), que fuera el brazo armado de la Oficina de Envigado en la región y marcó una clara instauración de lo que Kaldor ha denominado una “nueva guerra”; esto es, una confrontación armada con bajos niveles de filiación ideológica y nulo programa político (en este caso, con el BHG, los intereses económicos asociados a las economías ilegales hacen presencia y terminan por tomarse la región).

La guerra por el Oriente antioqueño: guerrillas y paramilitares

Por el lado de las FARC, su llegada al territorio ocurrió a partir del desplazamiento de algunas de sus tropas provenientes del Urabá antioqueño, donde se libraban fieras disputas por el control territorial con los hombres del EPL y las ACCU; así, la expansión territorial de este actor armado se presentó sobre el territorio bajo la lógica de un ejército de ocupación: una tropa de hombres armados se ubica intempestivamente en el territorio y modifica las lógicas de socialización que en él existían. El copiamiento militar de nuevos territorios fue parte de una táctica asumida por la guerrilla desde su mando central, como quedó consignado en la VII Conferencia de las FARC, de 1982, en la cual se formuló el Plan Estratégico para la Toma del Poder, con el planteamiento de la necesidad de la ampliación de su fuerza armada y el crecimiento de su presencia territorial, lo que les exigía crear nuevos frentes y compañías.

Para la década de 1980, las FARC asumieron un papel activo en el Oriente de Antioquia gracias a la creación del Frente 9, con presencia en los municipios de San Carlos, San Luis, San Rafael, Cocorná, Concepción y Alejandría; y posteriormente gracias a la entrada por el sur del Frente 47 con presencia en los municipios

de Sonsón, Argelia, Nariño y algunos límites entre San Francisco con la región del Magdalena Medio. En el siguiente mapa se pueden observar las rutas de entrada y la distribución territorial de estos dos frentes de las FARC.

Mapa 1. Frentes de las FARC en el Oriente antioqueño.



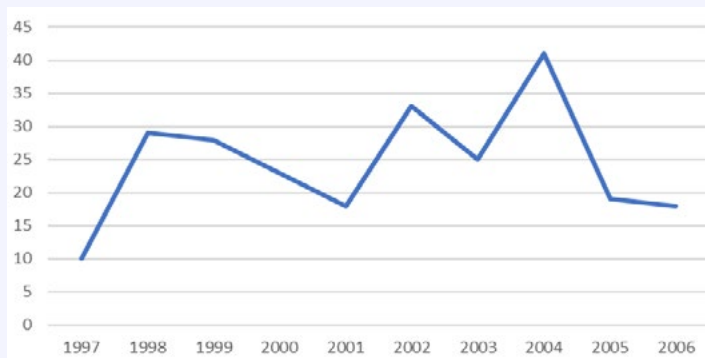
Fuente: Elaboración propia.

Como puede verse en el mapa anterior, el Frente 9 ingresó por la vertiente noroeste proveniente del Urabá e impulsado por el Frente 5 logró una expansión militar sobre la margen norte de la autopista Medellín-Bogotá, con presencia y actividad armada entre los municipios de Cocorná, San Luis, San Carlos, San Rafael y Granada. Según lo establecido en la VII Conferencia, uno de los principales objetivos de este frente guerrillero sería afectar el funcionamiento del complejo hidroeléctrico establecido en los municipios de su influencia. Por su parte, el Frente 47 ingresó desde el norte de Caldas y tuvo presencia en la zona sur del Oriente antioqueño, en los municipios de Argelia, Nariño, Sonsón y San Francisco. Entre los objetivos estraté-

gicos de este frente estaba frenar la arremetida de los paramilitares pertenecientes a las Autodefensas del Magdalena Medio.

Las acciones de las FARC en el territorio oscilaron entre proselitismo, actividad política y actividad militar de gran impacto, que terminaron por marcar el transcurso de las confrontaciones y la composición de los demás actores en el territorio. Entre las acciones que mayor impacto generaron en la población están la siembra de minas antipersonal, la extorsión, el secuestro y la toma de poblaciones. El siguiente gráfico muestra las acciones armadas de las FARC en el Oriente.

Gráfico 1. Acciones unilaterales de las FARC.



Fuente: Elaboración propia con datos del CERAC (2016).

Si bien la actividad militar de las FARC en el Oriente antioqueño fue determinada por la VII Conferencia, su ingreso, estabilización y capacidad no fueron inmediatos; de hecho, durante los primeros años de su presencia militar en la región, no muestra una importante tasa de acciones, como puede verse en el gráfico anterior. Sin embargo, para mediados de la década de 1990, los frentes 9 y 47 asumieron una mayor iniciativa debido a las determinaciones tomadas en la VIII Conferencia (1993) y en la conferencia del bloque José María Córdoba (1997); en estos dos encuentros los líderes guerrilleros decidieron tomar mayor iniciativa con sus frentes en el Oriente: esto marcó el inicio de uno de los periodos de mayor actividad militar allí.

En 1997, el Secretariado de las FARC ordenó a todos sus frentes interferir en las elecciones locales que se realizarían en ese mismo año. Acatando estas órdenes, los comandantes de los frentes 9 y 47 emitieron un comunicado público en el cual exigían la renuncia de todos los candidatos a las alcaldías municipales del Oriente antioqueño; además, y también en 1997, fueron asesinados candidatos de las alcaldías de San Carlos, San Rafael, El Peñol y Guatapé, así como el presidente del Concejo de La Unión. Finalmente, los candidatos de 20 de los 23 municipios renunciaron masivamente.

La presión de la guerrilla sobre las elecciones municipales fue tal que las autoridades se vieron en la obligación de trasladar todas las mesas de votación a los cascos urbanos, y el resultado electoral estuvo marcado por la abstención: en San Francisco solo votaron 11 personas, en San Carlos 52 y en El Peñol 140. Para colmo, esta presión contra los representantes políticos no terminó con el final de las elecciones: el Frente 9 secuestró a los alcaldes electos de Granada, Cocorná, San Francisco, San Luis, San Carlos y San Rafael. Así que muchos alcaldes tuvieron que despachar desde Medellín y algunos terminaron por dimitir.

El crecimiento de los frentes 9 y 47 en el Oriente fue de tal magnitud que en muchos territorios sus fuerzas se traslapaban, lo cual supone una dificultad táctica, militarmente hablando, pues se confunde la línea de mando. Por esto, en 1998 el Estado Mayor del Bloque José María Córdova anunció la creación del Bloquecito, conformado por unos 500 hombres de los frentes 9 y 47 al mando de alias Marcos; este grupo estaría encargado de liderar la toma de pueblos, del cobro de extorsiones y del traslado de secuestrados a la zona de páramos.

La creación del Bloquecito coincidió con una de las épocas de mayor actividad de las FARC en el país, resultado de su táctica de copiamiento territorial y ampliación de las acciones de sus unidades militares determinada en la VIII Conferencia. Para los frentes 9 y 47, esto supuso el aumento de su presencia territorial y control sobre la población. Con el Bloquecito las FARC pretendían aumentar su accionar militar en la región del Oriente y en el norte del departamento de Caldas.

Las primeras acciones del Bloquecito ocurrieron al norte de Caldas: el cobro de extorsiones a medianos y grandes productores de café, control sobre los corredores

de movilidad y control militar sobre algunos centros poblados y corregimientos como Arboleda, Berlín y San Diego, ubicados en Caldas, en límites con el Oriente de Antioquia. La actividad de las FARC en el Oriente, con las acciones del Bloquecito, aumentó significativamente entre los años 1998 y 2001, periodo en el cual llevaron a cabo las tomas de los municipios de Nariño, San Luis y Granada, y de los corregimientos El Prodigio y Santa Ana, además de la toma a la base militar de La Araña, en San Rafael.

Toma de poblaciones: la huella de las FARC en el Oriente antioqueño

Una de las principales acciones militares del Bloquecito fue la toma de poblaciones. Estas acciones marcaron profundamente las dinámicas sociales y determinaron el futuro de las FARC en la región. Luego de su consolidación en el norte de Caldas, donde el Bloquecito logró un importante fortalecimiento financiero y militar, desplazaron sus acciones a los municipios del Oriente, mostrando así una gran capacidad de movilidad y la fuerza suficiente para atacar poblaciones cercanas a Medellín y la región del altiplano.

En 1999, hombres de los bloques 9 y 47 al mando de alias Karina se tomaron el pueblo de Nariño, en la subregión de páramos. Sobre las 4:00 de la tarde del viernes 30 de julio un vehículo cargado con explosivos irrumpió en el parque principal del municipio y explotó luego de estrellarse contra una vivienda. Durante toda la noche de ese viernes, todo el día sábado 31 y la madrugada del 1.º de agosto, los guerrilleros hostigaron con cilindros bomba, disparos y morteros la estación de Policía. Destruyeron más de dos cuadras alrededor y causaron la muerte de nueve policías y siete civiles, más la retención de ocho miembros de la Fuerza Pública y 16 personas heridas.

La toma duró más de 36 horas y más del 80 % del pueblo quedó destruido. Fruto de la presión ejercida por los guerrilleros a consecuencia de la retención de los ocho miembros de la Fuerza Pública, el Gobierno nacional ordenó el despeje

del corregimiento de Puerto Venus, en Nariño, así como de los corregimientos de Arboleda y Florencia, de Pensilvania, Caldas. Días después de la toma, más del 50 % de la población se desplazó y ante el repliegue de la Fuerza Pública, el control del municipio fue asumido por los hombres de la guerrilla, al mando de Elda Neyis Mosquera, alias Karina, por más de un año, y no solo en cuestiones de orden público, sino que también hicieron las veces de jueces y hasta ajusticiaron a quienes no se “acomodaron” a su mando.

El 11 de diciembre de ese mismo año los frentes 9 y 47 se trasladaron hacia San Luis y se lo tomaron con cilindros bomba, morteros y hostigamiento constante sobre la estación de Policía, lo cual duró casi todo el día; en los hechos perdieron la vida ocho uniformados y dos civiles, y fueron secuestrados otros cinco policías. En la incursión armada fueron destruidas numerosas viviendas, las instalaciones de la Alcaldía, el Banco Agrario y el comando de Policía. Con esto las FARC demostraban su poder sobre un municipio estratégico por razones de movilidad y control de la autopista Medellín-Bogotá.

El fortalecimiento militar y la expansión del control territorial de las FARC durante los últimos años del siglo XX y los primeros años del siglo XXI en todo el país fueron enormes. La toma de poblaciones por parte de comandos conjuntos entre frentes de diferentes lugares se volvió común y demostraba las adecuadas condiciones de movilidad de esta guerrilla en todo el territorio nacional.

En Granada, en los primeros días del mes de diciembre, hombres de los frentes 9 y 47 y del frente 34 (este con presencia en el Suroeste antioqueño y Chocó) incursionaron en el municipio. El 6 y 7 de diciembre del año 2000, unos 500 hombres al mando de Karina y Santiago se tomaron la población de Granada, ubicada a 73 kilómetros de Medellín. Esta fue una de las tomas armadas que mayor conmoción causaron en el Oriente por su cercanía con la principal ciudad del departamento, lo que demostraba el poder militar de las FARC, y por el nivel de destrucción y las víctimas causadas durante las más de 20 horas que duraron los enfrentamientos. Perdieron la vida 19 personas, cinco de ellas policías, otras 21 resultaron heridas y más de 200 viviendas quedaron destruidas. En los días siguientes más de la mitad de los pobladores del municipio abandonaron sus casas, lo que trajo una seria crisis humanitaria.

El crecimiento militar de las FARC, su aumento de hombres en armas y su expansión territorial les demandaban establecer corredores de movilidad que facilitaran la comunicación entre las diferentes estructuras armadas como forma de consolidar su poderío y control territorial. Esta situación se presentaba entre los bloques José María Córdova, compuesto por los frentes 9 y 47 y por la columna Jacobo Arenas, y el Bloque Magdalena Medio, compuesto por los frentes 4 y 36, comandados en aquellos años por alias Pastor Alape.

El establecimiento de un corredor que facilitara la conexión entre estas estructuras ponía al corregimiento El Prodigio, del municipio de San Luis, en el centro de los intereses militares de las FARC. Para controlar este territorio los hombres de los frentes 9 y 47 debían enfrentarse con las Autodefensas del Magdalena Medio, que hacían presencia permanente en el corregimiento. Fue así como el 4 de marzo de 2001, unos 200 hombres al mando de alias Karina comenzaron un ataque militar sobre el casco urbano del corregimiento El Prodigio; así lo relata un informe de las Naciones Unidas (2013):

Ese día, cuando caía la tarde, unos 200 guerrilleros de los frentes 9 y 47 ingresaron hasta El Prodigio y se enfrentaron con las tropas de las Acmm acantonadas en ese corregimiento. Sorprendidas por el poder de fuego de las FARC, que recurrió a sus morteros hechizos y utilizó cientos de granadas de fragmentación, los paramilitares informaron de la situación a su comandante, Ramón Isaza.

“Yo había subido ese día por la mañana a El Prodigio a dejarle[s] una plata a los patrulleros. Cuando por la noche me llamaron por radioteléfono: ‘Se nos metió la guerrilla’, fue lo que escuché. Organicé dos patrullas de 20 hombres cada una y las mandé para allá”, narró alias el Viejo, quien informó de la situación a alias Mc Giver.

“Pedí refuerzos al Bloque Metro de Rodrigo Doble Cero. Logré reunir unos 300 hombres y nos desplazamos a la zona. Nos encontramos a las FARC y tuvimos unos combates muy fuertes, que duraron desde el lunes hasta el miércoles. Yo mandé varios de mis hombres al batallón Bárbula, les dije que se hicieran pasar como campesinos y que contaran lo que estaba pasando. Y al miércoles llegó la aviación, que logró replegar a la guerrilla”, contó Mc Giver.

Los guerrilleros llevaban entre sus filas un desertor de las Autodefensas que, según narraron quienes vivieron este ataque, iba encapuchado. Acompañados por él, los insurgentes sacaron de sus viviendas a cinco civiles y los asesinaron. Sus muertes se sumaron a las de los siete paramilitares que perdieron la vida en los combates. El pueblo terminó saqueado, con serias afectaciones en buena parte de sus edificaciones y con terror, mucho terror.

Lo peor estaría por venir. Casi 40 días después, el 27 de abril, un comando de 200 guerrilleros de las FARC, dirigidos por alias Danilo, regresaron a El Prodigio. Esta vez no hubo confrontaciones, “porque Ramón Isaza había dado la orden de que si se metía otra vez la guerrilla nos replegáramos en el cerro La Cruz, para que no hubiese combates con la población civil de por medio”, recordó alias Mc Giver (Verdad Abierta, 2014).

La batalla entre las FARC y las ACMM fue quizás uno de los mayores enfrentamientos directos entre paramilitares y guerrillas en el Oriente antioqueño, y esto demostraba la importancia del territorio para ambos grupos armados. Pese al extraordinario despliegue de fuerza hecho por las FARC, su control real sobre El Prodigio fue pasajero, pues las relaciones de los hombres de Ramón Isaza con los miembros de la Fuerza Pública fueron más efectivas y las ACMM retomaron el control del casco urbano, aunque las FARC conservaran la capacidad de amenazar y extorsionar ganaderos y mineros de la zona. El siguiente mapa muestra las principales tomas de las FARC en la región y sus rutas de movilidad.

Mapa 2. Tomas a pueblos realizadas por las FARC y corredores de movilidad.

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, los últimos años de la década de 1990 y los primeros de la década del 2000 estuvieron acompañados de un fortalecimiento en la capacidad operativa de las FARC, lo que se tradujo en un mayor control territorial y en el mejoramiento de sus corredores de movilidad. Esta ampliación del control territorial y su fortalecimiento militar llevaron a los frentes 9 y 47 a disputar sus territorios con grupos paramilitares y a encontrarse con las estructuras armadas de la otra guerrilla presente en el Oriente antioqueño; esto último abrió, por supuesto, otro frente de batalla.

El conflicto entre las guerrillas: la persecución armada de las FARC al ELN y sus consecuencias en el fortalecimiento paramilitar

En los primeros años del siglo XX, la presencia militar de las FARC se había expandido notoriamente en el Oriente; las tomas de poblaciones, las extorsiones y secuestros daban cuenta de un grupo fortalecido, con la capacidad de materializar una gran movilidad entre sus frentes 9 y 47, más el apoyo de frentes como el 5, el 4 y el 36, que excepcionalmente se trasladaban al Oriente para ejecutar operaciones conjuntas. Esta expansión y su fortalecimiento militar llevaron a los frentes de las FARC a ampliar sus corredores de movilidad y copar las zonas montañosas que les sirvieran de retaguardia, además de ejercer un control férreo sobre las economías de guerra, como la extorsión y el secuestro.

Estas situaciones terminaron por materializarse en una fiera confrontación entre las guerrillas de las FARC y el ELN, según lo afirma el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2020). Esta confrontación fue declarada por los hombres de las FARC, quienes comenzaron una persecución militar de los miembros de los frentes Carlos Alirio Buitrago y Bernardo López Arroyave del ELN. Las FARC obligaron a los frentes del ELN a movilizarse y perder el control sobre algunas de sus zonas.

Específicamente, la presión militar sobre el frente Carlos Alirio Buitrago terminó obligando a muchos de los guerrilleros del ELN a engrosar las filas de los grupos paramilitares, que, así, salieron fortalecidos por las disputas entre las guerrillas, en particular en los ejes de movilidad entre la subregión de bosques y el Magdalena Medio. Al menos 35 hombres del ELN ingresaron a las filas de las ACMM, a sus bloques Héroes de El Prodigio y José Luis Zuluaga.

La pérdida de territorio del ELN a manos de las FARC fue el resultado de su disparidad en términos de poderío militar y de las diferencias tácticas con las que ambos ejércitos se relacionaron con la población y las economías ilegales del Oriente antioqueño. En este sentido, el ELN le brindó especial importancia a la necesidad de construir su movimiento político militar a partir de una base comunitaria de simpa-

tizantes de sus propuestas y accionar militar; y esto terminó por exponer sus cuadros políticos y comunitarios, que al final fueron presa fácil de paramilitares y FARC.

De esta manera, la labor del ELN que le permitía construir con mayor solidez política sus bases comunitarias se convirtió en una importante debilidad ante una confrontación armada vertical como la que tuvo que asumir en contra de las FARC y los grupos paramilitares. Es común encontrar en los relatos de la región constantes cambios de denominación en los hombres que en algún momento pertenecieron al ELN y posteriormente migraron hacia los grupos paramilitares: la confrontación armada con las FARC obligaba al repliegue de las estructuras del ELN hacia zonas controladas por paramilitares.

Entonces, los bloques paramilitares terminaron por fortalecer sus filas con antiguos combatientes del ELN, un hecho fundamental en el curso de la guerra, pues los exmiembros de esta guerrilla conocían las rutas y las bases de movilidad de las FARC.

El ELN y su proceso de construcción desde las bases populares en el Oriente antioqueño

La historia de las luchas cívicas en el Oriente marcó un periodo en el que las reivindicaciones de las comunidades por mejores condiciones de vida, el respeto por las tradiciones campesinas y la oposición a los megaproyectos lograron movilizar importantes sectores, que pasaron de ser sujetos pasivos a convertirse en verdaderos actores políticos en las dinámicas municipales y regionales. Como ya se ha señalado, la respuesta que recibieron fue la persecución, el asesinato y el desplazamiento de quienes participaron en las movilizaciones.

Hay que decir que esta persecución sufrida por el movimiento cívico fue importante para la consolidación del ELN en la región por dos razones: primero, se constituye en la base de reivindicación política sobre la cual se justifica la lucha armada y, segundo, muchas de las personas y familias perseguidas por pertenecer al movimiento engrosaron las filas de la guerrilla, puesto que sus vidas corrían se-

rio peligro por la presencia de los grupos paramilitares. Tan importante fue que el ELN incluso se reconoce a sí mismo como una guerrilla surgida desde la región y conformada por los perseguidos (Ortiz, 2019, p. 25).

Ese vínculo proyectado con las bases sociales del Oriente antioqueño forma parte del accionar propio del ELN, que suele construir su aparato militar a partir de sus relaciones con la población, a diferencia de las FARC, que se comporta como un ejército de ocupación. Así que el ELN fue un actor que se fue construyendo desde los movimientos sociales y políticos ya existentes en la región hasta llegar a ser un grupo fuerte en el territorio, con unos 700 hombres en armas y alrededor de 1000 milicianos en la zona para los años 90.

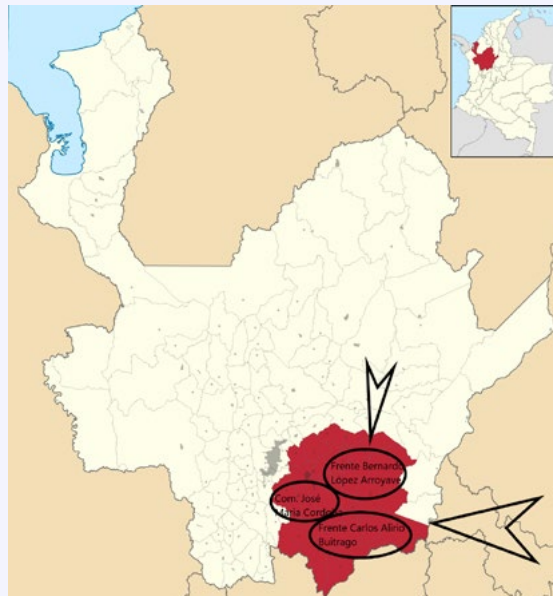
Desde el Magdalena Medio el ELN se desplazó hacia el Oriente antioqueño sin necesidad de movilizar grandes tropas ni recursos; su presencia inicialmente se concentró en movilización de masas política e ideológicamente. Por lo menos en un primer momento, el accionar militar del ELN se encontraba condicionado por su despliegue político y para la década de 1970, sobre las regiones cercanas a los límites entre el Oriente y el Magdalena Medio, se comenzó a escuchar sobre “teología de la liberación” y movimientos armados de corte cristiano.

La presencia del ELN en el Oriente se materializó militarmente para la década de 1980 entre las subregiones de bosques y embalses. Su estructura militar dio inicio a un movimiento que le permitió controlar las principales vías entre el Magdalena Medio y el Oriente, así como entre la región del Nus, que comunica el Oriente, el Norte y el Bajo Cauca antioqueños. Las tropas del ELN llegaron a tener presencia en todas las subregiones, incluyendo el altiplano.

Esta presencia se constituyó en una macroestructura denominada el Área Industrial, que contenía a los frentes Carlos Alirio Buitrago, nombrado así en homenaje a los hermanos Carlos y Alirio Buitrago (asesinados por hombres de las ACMM en 1982) y Bernardo López Arroyave, además de las compañías especiales José María Córdova y José María Carbonell y del Frente de Guerra Urbano Luis Fernando Giraldo, con presencia en Medellín.

El Carlos Alirio Buitrago, que hizo su aparición formal en la región para 1985, fue encargado de rodear el complejo hidroeléctrico, controlar la autopista Medellín-Bogotá y estropear la extracción de cemento en el río Claro y el río Nare. Por su parte, el Bernardo López Arroyave, que ingresó a la región por el corredor del Nus y se desplazó hacia las subregiones de embalses y el altiplano, con presencia en los municipios de Alejandría, Concepción, El Peñol, Marinilla y El Santuario, tenía la misión de acercar una presencia guerrillera importante al Aeropuerto José María Córdova y asegurar la movilidad entre las regiones del Oriente y el Nordeste de Antioquia, lo cual revestía gran importancia, pues garantizaba un corredor entre Oriente, Nordeste y Bajo Cauca antioqueños.

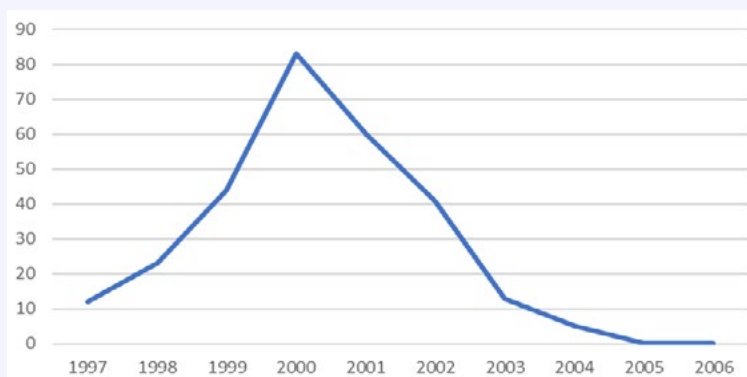
Mapa 3. Frentes del ELN en el Oriente antioqueño.



Fuente: Elaboración propia.

La presencia del ELN en la región alcanzó una gran relevancia nacional dentro de esa guerrilla; el Frente Carlos Alirio Buitrago llegó a ser el segundo en importancia para ese grupo insurgente por el número de hombres, que se estimaba para la década de 1990 en más de 700 en armas, y sumados sus cuadros milicianos llegaría a superar los 1300; además, contaba con gran capacidad operativa y ejercía control sobre una región de alto valor estratégico. El fortalecimiento militar del ELN tocó tales niveles de importancia que lideró las acciones militares en el Oriente antioqueño entre los años 1997 y 2002, tal como se puede ver en el siguiente gráfico.

Gráfico 2. Acciones unilaterales del ELN.



Fuente: Elaboración propia con datos del CERAC (2017).

La importancia militar del ELN y su despliegue operacional sobre las zonas cercanas a la autopista Medellín-Bogotá les permitió a los hombres del Carlos Alirio Buitrago ejercer control sobre el eje vial. La situación tuvo tal complejidad que en algunos momentos las tropas del Ejército prohibieron la circulación por la vía en horas de la noche (la autopista solo permanecía abierta de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde).

Como lo muestra el **Gráfico 2**, el ELN presentó un mayor nivel de actividad militar entre los años 2000 y 2004, principalmente atentados contra la infraestruc-

tura de las empresas eléctricas y mineras de la región. Pero los enfrentamientos con las FARC y la acción de los grupos paramilitares, desatada desde mediados de los 90, afectaron seriamente a aquella guerrilla, que había logrado desarrollar una vasta base de apoyos sociales y políticos en los municipios de las subregiones de bosques y embalses. Así que la estrategia asumida por los paramilitares de los bloques ACMM y el BM, basada en las masacres y el desplazamiento de las comunidades campesinas de los municipios y corredores utilizados por los elenos, menguó su capacidad de acción militar y los fue relegando paulatinamente del escenario bélico regional.

La arremetida paramilitar: la reconfiguración del territorio

El Oriente antioqueño fue el escenario de una de las mayores disputas en el marco del conflicto armado nacional. La importancia económica, política y geoestratégica de la región fue el detonante de una férrea confrontación entre los diferentes grupos guerrilleros, el Ejército y los paramilitares. En el trasfondo había un conjunto de intereses: desde la obligación institucional de controlar los territorios, pasando por los intereses económicos empresariales para la explotación de los recursos naturales, hasta el crecimiento de las economías vinculadas al narcotráfico, que tenían en la región un lugar de cultivo y un corredor.

La ruta de la expansión paramilitar en el Oriente antioqueño se debe trazar en torno a dos ejes, a partir de los cuales, principalmente, se presentó el copiamiento de toda la región. Como se puede ver en el siguiente mapa, una de esas rutas proviene del Magdalena Medio, entre los municipios de San Luis y Sonsón (en su corregimiento La Danta), ambos apostados sobre la autopista Medellín-Bogotá; esta ruta de ingreso fue la utilizada por los hombres de Ramón Isaza y las Autodefensas del Magdalena Medio. El otro eje de ingreso paramilitar proviene del Nordeste, sobre la región del Nus, por el cual ocurrió el ingreso de los hombres de alias Doble Cero y el Bloque Metro, quienes siguiendo órdenes expresas de Carlos Castaño expandieron su accionar militar desde los municipios del Norte y Nordeste hacia el Oriente antioqueño.

Mapa 4. Bloques paramilitares en el Oriente antioqueño.



Fuente: Elaboración propia.

La ubicación temporal de la aparición de los grupos paramilitares en el Oriente antioqueño reviste una serie de retos en su delimitación cronológica, principalmente debido al surgimiento desordenado y en ocasiones aislado de algunos de ellos, que luego fueron asumidos por estructuras más organizadas de alcance regional y nacional. En este sentido, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2020), el origen de algunos grupos paramilitares debe ser entendido en dos momentos: el primero, su génesis como actor armado y el segundo en su vinculación al proyecto paramilitar; este es el caso de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), cuyo surgimiento remite al periodo 1977 y 1991 y su proceso de consolidación y vinculación a las estructuras de alcance regional y nacional se ubica entre los años 1994 y 2000.

Según los relatos del propio Ramón Isaza, los orígenes de las ACMM se remontan a los sucesos presentados en el corregimiento Las Mercedes, de Puerto Boyacá, en 1978, cuando un grupo de personas se enfrentaron contra hombres de las FARC. Los relatos fundacionales del grupo remiten a una justificación de autodefensa y acciones heroicas contra las guerrillas; durante los primeros años tuvo el apoyo denodado de los mandos de la Base Calderón del Ejército Nacional en Puerto Boyacá, además de la financiación de ganaderos, madereros y comerciantes del Magdalena Medio. Así, con el apoyo de militares e importantes sectores económicos del Magdalena Medio, el grupo paramilitar fortaleció su accionar y expandió su control territorial durante toda la década de 1980, y el peso de Isaza fue de tal importancia que hasta 1995 el grupo fue conocido como las Autodefensas de Ramón Isaza.

Ya para 1996 y 1997, el grupo asumió la denominación de Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) y reforzó su expansión hacia el Oriente con los frentes José Luis Zuluaga y Héroes de El Prodigio, al mando de alias Mc Giver y alias Terror, respectivamente. Para la expansión de los frentes de las ACMM la autopista Medellín-Bogotá fue un factor fundamental; así, su expansión hacia los municipios de páramos se realizó por el corregimiento La Danta, de Sonsón, desde donde lograron llegar a la cabecera del municipio y a los vecinos Argelia y Nariño. De igual manera, su presencia en el municipio del altiplano El Carmen de Viboral ocurrió desde su jurisdicción sobre la autopista, penetrando por la región de los cañones y haciendo presencia en el casco urbano. Como puede verse en el mapa anterior, la ubicación geográfica de las ACMM se materializó sobre el margen sur de la autopista, con excepción de algunos territorios pertenecientes al municipio de San Luis.

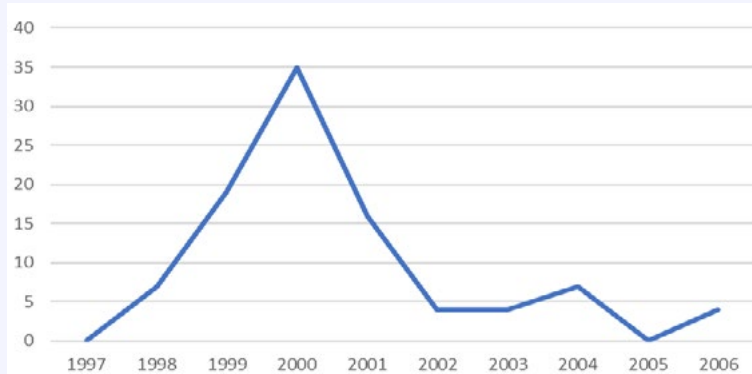
Por su parte, sobre el corredor del Nus, que conecta las regiones del Nordeste y el Oriente, en 1996 se presentó el ingreso de hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). La estrategia de ingreso a la región se generó, en un primer momento, mediante una fuerte campaña de amenazas: panfletos, paredes pintadas y señalamientos a líderes, comerciantes y campesinos, acusados de ser auxiliares de la guerrilla. Con esta estrategia pretendían crear zozobra y propiciar conflictos entre los pobladores y los frentes guerrilleros presentes en los municipios de embalses y bosques. Una vez consolidada su presencia en el margen norte de la

Medellín-Bogotá, el grupo paramilitar asumió la denominación de Bloque Metro, al mando de alias Doble Cero, quien extendió su control sobre los municipios de embalses, altiplano, Nordeste y algunas comunas de Medellín.

Resulta importante resaltar las diferencias existentes en la expansión y control territorial entre los grupos guerrilleros y los paramilitares, puesto que ello permite entender las diferentes dinámicas de la confrontación vivida en el Oriente antioqueño y, sobre todo, comprender cómo se llegó a tan altos índices de vulneración de los derechos humanos de sus habitantes.

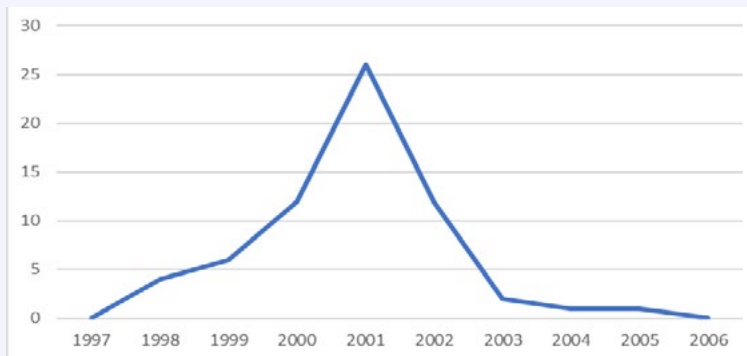
Por un lado, la presencia guerrillera se ubicó principalmente sobre los territorios rurales con condiciones adecuadas de movilidad, desde los cuales lograban desplegar acciones militares concretas sobre objetivos de valor estratégico, como la infraestructura eléctrica, carreteras y casco urbanos. Las guerrillas privilegiaron una táctica de movimientos, producto de su inferioridad tecnológica frente a las Fuerzas Militares del Estado. Por su parte, los grupos paramilitares privilegiaron una táctica de posiciones en cascos urbanos, corregimientos y centros poblados como resultado de su cercanía y trabajo conjunto en muchas ocasiones con las fuerzas de seguridad estatales.

El accionar militar de los paramilitares, en el país y en el Oriente, se centró en el asesinato de pobladores acusados de ser auxiliares de las guerrillas y tácticas de confinamiento que restringían la movilidad de las comunidades y limitaban el ingreso de alimentos y medicinas de los campesinos a sus viviendas, con el fin de limitar el aprovisionamiento de los grupos guerrilleros. El accionar de los paramilitares se centró en la población civil, en eliminar las bases de apoyo y movilidad de las guerrillas. En el Oriente antioqueño, entre 1985 y 2012 fueron asesinadas 14.997 personas en hechos no asociados con enfrentamientos militares. Finalmente, como se puede ver en el siguiente gráfico, el accionar de los paramilitares tuvo un aumento constante entre 1999 y 2001.

Gráfico 3. Acciones unilaterales de los paramilitares.

Fuente: Elaboración propia con datos del CERAC (2017).

Los grupos paramilitares se centraron principalmente en el asesinato y el desplazamiento de la población. Como se puede ver en el siguiente gráfico, entre 1998 y 2003 llevaron a cabo 62 masacres en el Oriente antioqueño (acciones armadas sobre la población civil en las cuales son asesinadas más de tres personas).

Gráfico 4. Masacres paramilitares.

Fuente: Elaboración propia con datos del CERAC (2017).

La relación entre los hombres del Bloque Metro y las ACMM fue de colaboración y alianzas, lo que llevó incluso a que los hombres de Mc Giver expandieran su presencia a algunos barrios de Medellín en los cuales el BM había logrado consolidarse desde inicios de los 90. Sin embargo, esas relaciones de cooperación entre grupos paramilitares se rompieron con la guerra desatada dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre los hombres de Don Berna y Doble Cero, que comenzó en el Urabá y llegó a muchos territorios del país, entre ellos el Oriente.

Foto: David Sánchez, Promedios Audiovisuales.



Tercer ciclo de violencia

La guerra entre paramilitares: confrontación entre el Bloque Metro y el Bloque Héroes de Granada

Cuando en 1997 se anunció la creación de una estructura que lograra vincular bajo una misma denominación a todos los bloques y frentes paramilitares dispersos en el país y que operaría bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), surgieron múltiples interrogantes: ¿cuántas eran las estructuras paramilitares existentes en Colombia?, ¿dónde se encontraban?, ¿quiénes estaban al mando?, y quizás la más compleja: en un país donde los paramilitares y las bandas aliadas al narcotráfico habían trabajado históricamente de la mano, ¿cómo se podía determinar cuáles estructuras eran paramilitares y cuáles no?

A partir del anuncio hecho por Carlos Castaño sobre la creación de una asociación nacional de paramilitares, muchos grupos que otrora no fueron reconocidos como paramilitares tomaron esa denominación y pasaron a formar parte de la recién creada organización. Este es el caso del Bloque Cacique Nutibara (BCN), surgido en 2001 y que operó en las subregiones del Norte, Nordeste, Occidente y Valle de Aburrá. Para muchos analistas (IPC, 2006), el BCN representaba la vinculación del Cartel de Medellín a la confederación paramilitar y con ello quedaban en evidencia las profundas relaciones que algunos de estos grupos sostenían con carteles narcotraficantes.

La llegada de estructuras narcotraficantes al seno de las AUC propició importantes controversias dentro de la asociación de grupos paramilitares; la más importante de ellas fue, sin duda, la librada entre Rodrigo Doble Cero, exintegrante de las Fuerzas Militares, jefe del Bloque Metro, reconocido contradictor de la influencia que el narcotráfico ejercía y un paramilitar pura sangre (en términos de Duncan, 2013), y Don Berna, reconocido narcotraficante proveniente de la Oficina de Envigado, quien, continuando con la clasificación del profesor Duncan, podría ser denominado como un “narcotraficante pura sangre”.

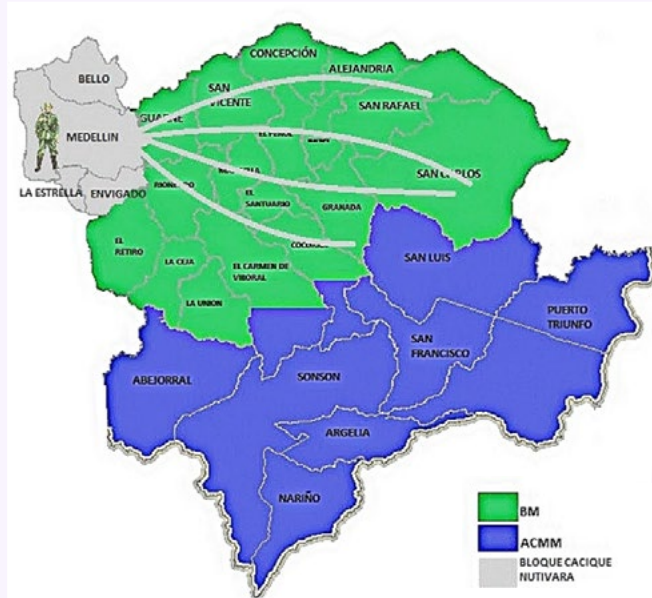
En mayo de 2003 estalló la confrontación entre los bloques Metro y Cacique Nutibara; los hombres de Don Berna arremetieron contra el BM, con choques armados en Amalfi, La Ceja y Santa Bárbara; en junio se extendieron a Segovia y El Santuario; en agosto se registraron en Santo Domingo y Yalí, Nordeste antioqueño; finalmente, la fuerza de Rodrigo Doble Cero terminó replegada en San Roque, de donde fue desterrada. Todo esto antecedido por una fuerte confrontación entre estos bloques en Medellín, que se fue extendiendo al Oriente.

Tras la desaparición del Bloque Metro, el 25 de noviembre del año 2003 los hombres del Cacique Nutibara firmaron su proceso de desmovilización y unos 855 entregaron sus armas en Medellín. Sin embargo, antes que finalizara ese año surgió el Bloque Héroes de Granada, el cual hizo presencia en el Valle de Aburrá, Suroeste, Nordeste y Oriente de Antioquia. Para muchos analistas, el Bloque Héroes de Granada (Alonso y Valencia, 2008, p. 24) fue el cambio de denominación del Cacique Nutibara, que bajo este nuevo nombre continuó operando en sus antiguas zonas de control. El siguiente mapa muestra el proceso de ingreso y expansión del BHG.

El Héroes de Granada tuvo una vida corta: su desmovilización ocurrió el 1.º de agosto de 2005 en la finca La Mariana, paraje Palo Negro, corregimiento de Cristales, con 2033 integrantes y 1120 armas. A pesar de su corta existencia, el BHG aportó una alta cuota en las cifras de violación a los derechos humanos, como lo demuestra el siguiente gráfico, en el cual está el número de asesinatos ocurridos en los municipios bajo su control durante los dos años en los que ejerció control militar.

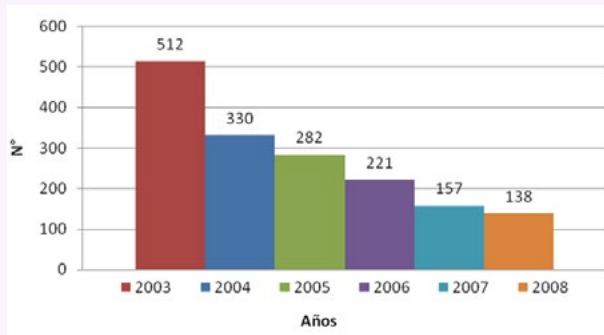
Para algunos analistas, el Héroes de Granada representaba el componente rural de la Oficina de Envigado en su afán por controlar zonas de producción de sustancias narcóticas, como las subregiones de bosques y embalses, además de importantes corredores de movilidad para el narcotráfico como la autopista Medellín-Bogotá, el corredor Oriente-Nordeste y el corredor que conecta con Caldas y el interior del país (así lo muestra el siguiente mapa). El BHG no tuvo ninguna oposición armada importante de otros grupos, puesto que los demás paramilitares estaban vinculados a los procesos de paz y las guerrillas estaban replegadas debido al aumento de la operatividad del Ejército Nacional en la región.

Mapa 5. Incurción Bloque Héroes de Granada al Oriente antioqueño.



Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 5. Homicidios en zonas de control del BHG.



Fuente: Elaboración propia con datos del *Informe sobre la situación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el Oriente antioqueño – 2011-2012*

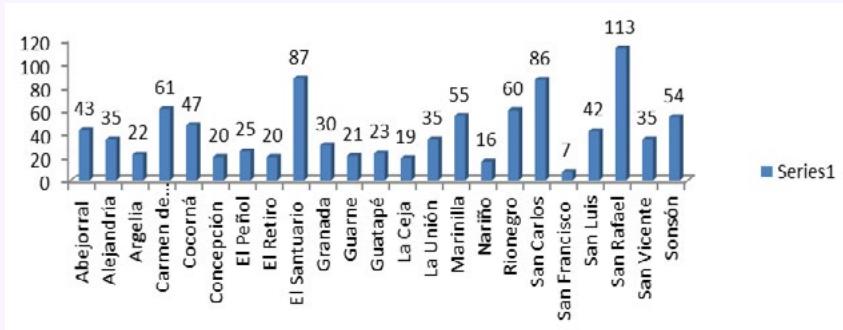
Mapa 6. Corredores de movilidad en el Oriente antioqueño.



Fuente: Elaboración propia.

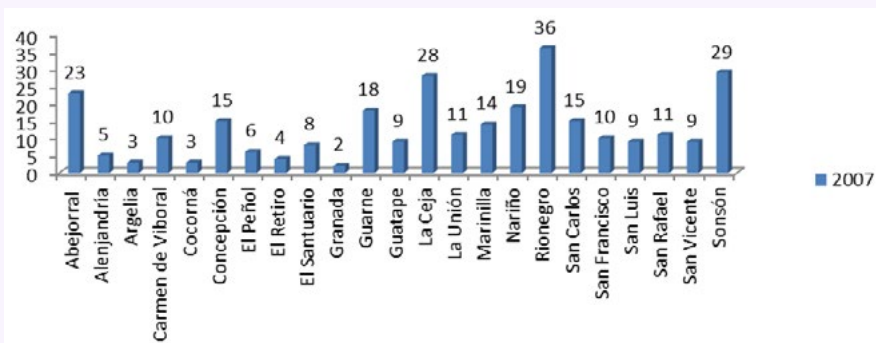
Así las cosas, el conflicto en el Oriente sufrió un quiebre fundamental en el año 2003, generado por el triunfo del BHG y su significado en términos del ingreso de una estructura organizada al servicio del narcotráfico. Este cambio hubo de marcar el ritmo futuro de las confrontaciones en la región, especialmente en el altiplano: la disputa por el control del negocio del microtráfico y las economías ilegales entre la Oficina de Envigado, en cabeza del BHG, y otras estructuras que le disputaban su control sobre las rentas.

Para 2007, la consolidación territorial de las estructuras asociadas al narcotráfico había generado un cambio cualitativo en las dinámicas de la confrontación en el Oriente antioqueño: los territorios en disputa se trasladaban desde las subregiones de bosques, embalses y páramo hacia el altiplano. Los siguientes gráficos (6 y 7) muestran la modificación de las tendencias de homicidios y desplazamiento en la región.

Gráfico 6. Homicidios 2000.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía (2011).

El 2000 fue un año de gran actividad guerrillera y paramilitar en páramos, embalses y bosques; Sonsón presentó 54 homicidios, San Carlos 86, San Luis 42 y San Rafael 113.

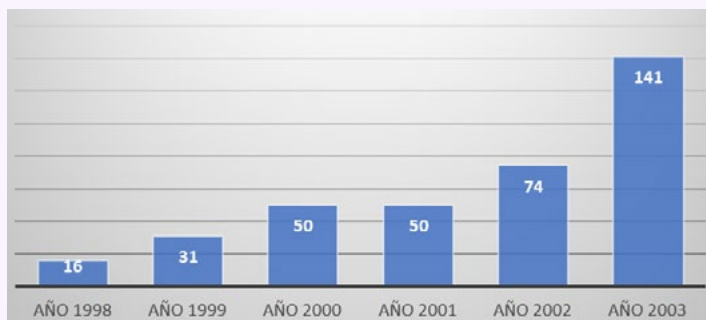
Gráfico 7. Homicidios 2007.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía (2011).

Como se puede observar en el gráfico, las cifras de homicidios para 2007 tuvieron una dinámica considerable en los municipios del altiplano; esto, en el contexto de reincorporación de los grupos paramilitares a partir de la Ley 975 de 2005 y del repliegue de las guerrillas producto de las operaciones militares Meteoro, Marcial y Espartaco.

Como en el resto del país, en el Oriente antioqueño hubo una relación directa entre el aumento en la operatividad de las Fuerzas Militares y un descenso en el accionar de los paramilitares. Esta relación respondió a dos situaciones en particular: por un lado, los grupos paramilitares se encargaron de romper las bases de apoyo y movilidad de las guerrillas mediante el asesinato y el desplazamiento de las comunidades (eliminaron la ventaja que utilizaran las guerrillas en su táctica de movimientos); y en segundo lugar, la implementación de la política de seguridad democrática en el primer Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que incrementó el accionar militar fundamentado en el despliegue de tropas y el uso a gran escala de la Fuerza Aérea con bombardeos sobre zonas de presencia insurgente. En el siguiente gráfico se muestra el aumento de las operaciones militares en el Oriente antioqueño.

Gráfico 8. Operaciones militares en el Oriente antioqueño.



Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Defensa (2011).

Algunas de las operaciones más destacadas en la región fueron las siguientes:

- **Operación Meteoro.** Dispuso 2500 hombres del Ejército a lo largo de la autopista Medellín-Bogotá e instaló retenes cada tres kilómetros con el objetivo de recuperar la vía en el año 2002.
- **Operación Marcial Norte.** La llevó a cabo la Cuarta Brigada en San Francisco en contra de los frentes 9 y 47 de las FARC y del Carlos Alirio Buitrago del ELN en 2003.
- **Operación Espartaco.** Fue llevada a cabo en los municipios de San Carlos, Sonsón y San Luis en contra de los frentes 9 y 47 de las FARC y el Bernardo López Arroyave del ELN.

Con estas operaciones militares, más el accionar de los grupos paramilitares, las guerrillas se vieron en la obligación de replegarse y abandonar su posición de avanzada en el Oriente antioqueño, por lo cual, para este mismo año 2007, la región fue declarada como zona de consolidación, esto es, libre de presencia guerrillera.

Foto: David Sánchez, Promedios Audiovisuales.



La otra cara del conflicto en el Oriente antioqueño

El papel de las víctimas en la resistencia al conflicto y la recuperación del territorio

El Oriente llegó a ser la segunda región del país en número de víctimas del conflicto armado; el desplazamiento, los asesinatos y el confinamiento condujeron a una crisis humanitaria de gran magnitud. Las dinámicas del conflicto alcanzaron tales niveles de intensidad que entre 1999 y 2004 en municipios como San Luis, Granada y San Francisco más de la mitad de la población se desplazó.

La magnitud de la tragedia humanitaria y la poca capacidad de reacción de las instituciones del Estado para propiciar una adecuada atención a las víctimas (restitución de derechos y garantías de no repetición) aumentaron los índices de vulnerabilidad de las personas que se vieron afectadas por los grupos armados. Así fueron surgiendo en la región diversas expresiones de resistencia y de acompañamiento a las víctimas.

Como se ha señalado anteriormente, la historia del Oriente antioqueño no es ajena a las organizaciones y movilizaciones civiles; ya desde la década de 1960 en la región había importantes expresiones ciudadanas que buscaban influir en las dinámicas sociales, políticas y económicas. Sin embargo, el violento exterminio, el sistemático asedio, asesinato y desplazamiento de los líderes comunitarios, sindicales y de organizaciones de base a manos de los grupos paramilitares, por considerarlos cercanos a las guerrillas, terminó por debilitar el tejido social de la región.

Como consecuencia, las dinámicas de asociatividad, las expresiones sociales y las culturales sufrieron un retraso importante, sobre todo entre los años de mayor intensidad del conflicto: 1998 y 2003. A pesar de la compleja situación de seguridad,

los altos índices de violación a los derechos humanos y el desplazamiento y empujamiento que sufrían las poblaciones del Oriente, fueron apareciendo expresiones de asociatividad que buscaban resistir a las acciones de los armados y proteger los derechos humanos.

En este sentido, es importante reconocer dos momentos en la historia de los movimientos ciudadanos y de víctimas en el Oriente antioqueño: primero, el que se presenta en el marco de las confrontaciones armadas y que se puede denominar “de resistencia”; y segundo, en el marco de los posconflictos y que se podría denominar “de memoria”. En algunos casos, ambos tipos de expresiones se conjugaron en el territorio y fueron determinantes para limitar los impactos de la guerra sobre la sociedad civil y, sobre todo, para llevar a cabo procesos de atención psicosocial y humanitaria a las víctimas.

Si bien es cierto que la historia del Oriente antioqueño se cuenta a través de sus conflictos, tras décadas de enfrentamientos armados álgidos y dolorosos, también es cierto que se cuenta a partir de sus movilizaciones civiles, pacíficas y democráticas; las gentes del Oriente han sabido resistir a la guerra y a la imposición de modelos de desarrollo que las despojan del territorio y aniquilan sus estilos de vida. La historia de esas luchas ciudadanas reviste una importante complejidad: en ellas han participado ONG, gobiernos extranjeros, movimientos sociales y, sobre todo, la gente del común, los habitantes.

Ubicar históricamente el inicio de las movilizaciones ciudadanas en pro de la paz, la defensa de los derechos humanos y la resistencia a los embates de la guerra resulta un ejercicio de gran complejidad, toda vez que supone una arqueología académica que logre reconocer las diferentes expresiones que en cada uno de los municipios se fueron gestando con sus propias realidades; en muchos casos, las comunidades se movilizaron para intentar disminuir los impactos de las acciones de los grupos armados sobre las personas (por ejemplo, las asambleas comunitarias).

Una primera iniciativa para superar la violencia dejando atrás el temor de enfrentar a los actores armados surgió conjuntamente de una asamblea comunitaria y el alcalde del municipio de San Luis, quienes decidieron buscar un acercamiento con el

ELN y proponer un espacio de concertación entre ese grupo insurgente, la empresa empleadora en la localidad y la comunidad, a fin de cesar las acciones violentas, favorecer el trabajo productivo y demandar de la empresa un mayor compromiso social. Este episodio desencadenó una serie de asambleas comunitarias en otros municipios y terminó conformando un movimiento liderado por los alcaldes, quienes consiguieron como respuesta a sus demandas una tregua de seis meses por parte del ELN (Conciudadanía, 2018).

Las asambleas comunitarias lograron establecer canales de diálogo efectivo entre las comunidades, las autoridades locales y los grupos armados, lo cual les permitió a los mandatarios municipales recuperar su margen de acción frente a las complejas condiciones de orden público y frente a aspectos relevantes como la responsabilidad social de las empresas y el pago justo de salarios. En este sentido, las asambleas comunitarias se convirtieron en verdaderos grupos de presión, que a pesar de haber sido desautorizadas por el gobierno central (la Presidencia de la República se negaba a permitir el inicio de diálogos regionales con los grupos armados), les ayudó a las comunidades a recuperar la confianza frente a la consolidación de estrategias de diálogo y concertación, lo cual, a la postre, reactivó el trabajo de los grupos sociales.

A partir de la segunda mitad de la década de 1990 comenzaron a surgir organizaciones sociales y expresiones ciudadanas que serán de gran importancia para el Oriente antioqueño. Tras la dolorosa historia de aniquilación del movimiento cívico, el papel de la Iglesia católica en el resurgimiento de las movilizaciones ciudadanas fue de gran importancia, toda vez que lograba convocar la movilización gracias a su presencia en toda la región con un marcado tinte pastoral e institucional desde los denominados Foros de Paz convocados por la Diócesis de Sonsón-Rionegro en 1994 y la conformación de la Corporación Vida, Justicia y Paz en 1998.

En este ambiente pueden ubicarse otras iniciativas que siguieron a la acción de los alcaldes y que dan cuenta de una tendencia hacia la búsqueda de soluciones al conflicto armado. En primer lugar, la convergencia de actores en la Corporación Programa Desarrollo para la Paz (Prodepaz), que se constituyó en 1999 por iniciativa de la Diócesis Sonsón-Rionegro, las empresas del sector eléctrico, ISA e Isagen, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), la Corporación

Vida, Justicia y Paz y la Diócesis de Barrancabermeja, con el propósito de promover la organización comunitaria y su proyección hacia un “desarrollo humano integral sostenible” generador de cambios en la calidad de vida de sus habitantes y de su entorno (Conciudadanía, 2018).

En el contexto de las movilizaciones sociales de la segunda mitad de la década del 90, también en San Luis surgió la propuesta de conformar una **Asamblea Provincial** que movilizara las expectativas de integración regional a través de un proceso de promoción de la democracia y en la perspectiva de enfrentar los efectos de la violencia y los altos índices de pobreza y exclusión existentes en los municipios del Oriente.

La naciente confianza en procesos de concertación condujo en 1998 a la primera Asamblea Provincial de Paz, preparatoria de la primera sesión nacional de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz. Desde entonces se realizaron periódicamente sesiones de la Asamblea Provincial. El 14 de septiembre de 2002, en la IX sesión, y ante la intimidación de las FARC a los alcaldes populares, la Asamblea se proclamó constituyente, enfatizando su vocería como expresión de la soberanía popular para respaldar a los alcaldes elegidos por votación popular (Conciudadanía, 2018)

Con el acompañamiento de Conciudadanía, la **Asamblea Provincial Constituyente del Oriente Antioqueño** tuvo la participación de delegados de las asambleas municipales, representantes de las organizaciones de mujeres, de jóvenes, además de la Asociación de Personeros del Oriente, el Consejo de Alcaldes y el Sistema Regional de Planeación. Si bien esta propuesta tuvo entre sus frentes de acción atender los efectos humanitarios de la guerra en la región, sus alcances fueron mucho más allá y procuraron la consolidación de una región autónoma, con altos índices de calidad de vida y apropiada de sus recursos naturales, lo cual implica un proceso no solo de resistencia frente a la guerra y atención humanitaria, sino un camino hacia la planificación democrática del territorio.

El trabajo de estas y otras expresiones de organización social y resistencia a la guerra fue canalizado con la participación del Oriente antioqueño en el segundo Laboratorio de Paz, auspiciado por la Unión Europea y operado por Prodepaz; este

logró vincular a los diversos sectores de la región: institucionales como alcaldías, personerías, concejos, la Diócesis Sonsón-Rionegro, la Presidencia y Vicepresidencia de la República, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la comunidad internacional, los ministerios, la Dirección Nacional de Planeación, el Congreso de la República, y no gubernamentales como las asociaciones de víctimas, ONG, movimientos sociales y juntas de acción comunal. En el marco del segundo Laboratorio de Paz de la región se implementaron 35 proyectos que buscaban desactivar las causas detonantes del conflicto y propiciar un desarrollo socioeconómico sostenible.

Por su parte, al hablar de los procesos organizativos generados desde la sociedad civil en el Oriente antioqueño no se pueden dejar de lado las organizaciones de víctimas, y en especial las organizaciones de mujeres víctimas, quienes a partir de la segunda mitad de la presente década asumieron un rol protagónico en el movimiento social de la región. Si bien los movimientos de víctimas se fortalecieron con la entrada en vigor de la Ley 975 de 2005, por la cual se llevó a cabo el proceso de paz con los grupos paramilitares y le dio un papel importante a las víctimas y a los procesos de producción y conservación de la memoria histórica, en el Oriente las asociaciones de mujeres víctimas tienen un referente previo que resulta importante resaltar.

Este proceso organizativo, que se remonta a la década de los 80, empezó a perfilarse de manera incipiente con el trabajo que se desarrolló entre las comunidades y la Asociación de Centros de Atención al Preescolar de Antioquia (Acaipa) desde la segunda mitad de la década de los 70. Aunque el trabajo de Acaipa estuvo centrado en principio en la organización de la comunidad para la atención a niños y niñas menores de siete años, se fue generando un escenario para trabajar también con las mujeres y contribuir a su organización en la región. En este contexto, empezaron a tener lugar encuentros de mujeres y se fue generando un movimiento incipiente para la organización de su participación (García y Gómez, 2017, p. 47).

La consolidación de Acaipa sentó las bases para el fortalecimiento de la participación de las mujeres en la región y es el antecedente para el surgimiento de Conciudadanía, una organización no gubernamental creada en 1991 y que jugó un papel muy importante durante las siguientes décadas al impulsar y apoyar distintas organizaciones sociales de la región. Conciudadanía apareció como una respuesta

al impulso que la Constitución de 1991 le dio a la democracia participativa. Esta organización “recogió muchos de los elementos con los que se venía trabajando en Acaipa”, pero pretendió “hacer el tránsito de la participación comunitaria a la participación ciudadana” (García y Gómez, 2017).

Con la aparición de la Consejería para la Mujer de Antioquia en 1992, se impulsó en la región “la creación y legalización de asociaciones de mujeres en los municipios” (Londoño, Marín y Alzate, 2005, p. 34). Por otro lado, en concertación con esta consejería, Conciudadanía desarrolló un proyecto que se denominó “Mujer al Poder Local”, cuyo propósito era la formación de las mujeres en ciudadanía y política. En este contexto surgió AMOR en 1994, como una organización de segundo grado que recogía las organizaciones de mujeres a nivel municipal en el oriente antioqueño (García y Gómez, 2017).

Durante los años siguientes, Conciudadanía propició una serie de procesos formativos en los que participaron las mujeres de AMOR; en 1996 se inició un proyecto de organización y participación política de las mujeres denominado Mujer por la Equidad de Género, de la Casa a la Plaza, que buscaba “cualificar el liderazgo social y político de las mujeres y fortalecer las organizaciones a las cuales pertenecían” (García y Gómez, 2017, p. 36). Entre 1999 y 2001 se desarrolló la Escuela de Gestión Pública con Perspectiva de Género, que posibilitó la formación de las mujeres de AMOR en aras de promover su participación en espacios públicos.

La presencia de organizaciones de mujeres que trabajan en el marco del conflicto armado por la defensa de los derechos humanos y los derechos de las víctimas se remonta a la década de 1980; sin embargo, fue a partir del año 2004 que estas organizaciones adquirieron mayor fuerza y se posicionaron como actores fundamentales en el tejido social de la región. Los ejercicios de memoria se han construido desde las comunidades, las víctimas del conflicto han desarrollado estrategias para la construcción y la comunicación de la memoria.

Algunas instituciones han prestado un importante acompañamiento para la realización de dichos ejercicios de memoria; aquí se destaca la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño, que ha realizado una serie de informes sobre la

situación del conflicto en la región que se han constituido en una herramienta para la visibilización de la situación humanitaria. También es importante resaltar el papel de Conciudadanía en el acompañamiento brindado a los ejercicios de construcción de memoria, entre los que se pueden destacar los trabajos hechos en Sonsón y San Luis.

El trabajo realizado por Conciudadanía en estos dos municipios del Oriente antioqueño quedó consignado en dos trabajos escritos: *Sonsón memoria viva* y *Un camino a la verdad, construcción de memoria colectiva de las víctimas del conflicto armado del municipio de San Luis*; en ellos logra reconstruir el paso de la guerra por los territorios, las formas como las comunidades resistieron a los embates de esa guerra y la manera en que las mismas comunidades vienen recuperando el tejido social. En suma, se trata de ejercicios de memoria escritos en dos tiempos que retratan las afectaciones generadas por la guerra y cómo las comunidades pudieron establecer procesos de resistencia y reparación.

En el Oriente, las organizaciones de víctimas, entre las que se destacan las de mujeres, llevaron a cabo acciones simbólicas en los territorios más golpeados por los grupos armados:

- En 2004 se realizó El Gran Clamor en el marco de la Semana por la Paz, con jornadas simbólicas para recordar a las víctimas y hacer un llamado para poner fin a la guerra.
- En 2004 se llevó a cabo la marcha Abriendo Trochas, una caminata coordinada en los 23 municipios de la región, por aquellos caminos que habían sido cerrados por la guerra y con la consigna “No más, ni una más, nunca más, otro Oriente es posible”.
- En 2004 y 2005 se llevaron a cabo las Jornadas de la Luz en los parques principales de los municipios del Oriente como acto simbólico para recordar a las víctimas y pedir por el fin del conflicto.
- En 2006 se realizó el segundo recorrido Abriendo Trochas con el ánimo de llegar a los territorios más alejados y golpeados por el conflicto, resaltar la memoria de las víctimas y fomentar la idea de una región unida en torno a la paz.

Las organizaciones de víctimas tienen un alto grado de simbolismo para la reconciliación y la recuperación de los espacios de encuentro comunitario. Para ellas recuperar los espacios de movilización cotidiana, como los caminos veredales, y los lugares de encuentro, como los parques principales de los municipios, representaba una apuesta por devolverles a las personas del común esos lugares que habían sido arrebatados por los actores armados.

Foto: David Sánchez, Promedios Audiovisuales.



Conclusiones

El Oriente antioqueño es una región rica en recursos naturales; sus abundantes fuentes hídricas y de minerales de alto valor, sumados a su posición geográfica estratégica y a una infraestructura altamente competitiva, la han tornado en una de las zonas de mayor proyección económica y empresarial del departamento. Desde la década de 1960 sobre esta región se proyectaron importantes obras de infraestructura para generación de energía eléctrica y movilidad terrestre y aérea. Según Cornare, para el año 2021 en la región se registraban 66 solicitudes de licenciamiento para la construcción de centrales y microcentrales eléctricas.

Su importancia económica y estratégica ha propiciado el surgimiento de conflictos por la disputa de los recursos y corredores de movilidad en los que se han visto inmersos los diferentes actores armados del conflicto colombiano, como las fuerzas del Estado, las empresas con intereses sobre la región y los habitantes de los 23 municipios que la componen. La historia del Oriente en sus últimos 70 años se cuenta a partir de los ciclos de movilización social y de violencia; su historia parece un proceso cíclico que va de la movilización social a la violencia, dejando en el camino una estela de heridas sin sanar y procesos de conflictividad sin cerrar que les abren la puerta a nuevos episodios de violencia.

Por lo tanto, entender el conflicto armado en la región demanda un ejercicio de contextualización sobre cada uno de esos ciclos que permita dilucidar las características de cada uno de ellos para poder así construir un relato que deje entrever cuáles son las problemáticas que permanecen en el tiempo y sobre las cuales se van encadenando, uno tras otro, los momentos de la guerra en la región. Leer el conflicto armado en el Oriente desde los ciclos de violencia demanda, asimismo, una demarcación a partir de las luchas sociales y el accionar de los grupos armados que han actuado allí.

Dicho ejercicio permite esclarecer algunas particularidades del conflicto librado en la región: quizás la primera tenga que ver con el hito sobre la llegada del conflicto;

en la mayoría de los relatos se entendía que la presencia guerrillera de la década de 1970 habría sido el inicio, de donde se desprende que el accionar paramilitar sería la respuesta a la presencia y los abusos de la insurgencia. Sin embargo, si se entiende el exterminio del movimiento cívico del Oriente como un acto de guerra, se verá que las acciones de grupos aliados con las élites políticas y económicas locales y regionales, que contaron con el auspicio de la Fuerza Pública, configuran la puerta de entrada del conflicto a esta región de Antioquia.

Este es un hito importante toda vez que permite aclarar cómo el conflicto se estableció desde un principio por el control de los recursos naturales, la implementación de los megaproyectos y la preservación de una estructura política afín a esos proyectos. Las guerrillas no se distancian de esas dinámicas: su posicionamiento en la región, la consolidación de sus frentes en los territorios y sus dispositivos de acción respondieron a su intención de controlar esas zonas de interés económico y afectar los intereses del Estado y de las grandes empresas que hacían presencia allí.

Del segundo ciclo de violencia, la confrontación entre guerrillas y paramilitares, se pueden resaltar al menos dos situaciones que permiten entender este periodo y sus relaciones con el sostenimiento del conflicto en la región. La primera de ellas tiene que ver con los dispositivos de lucha utilizados por unos y otros, lo cual muestra sus relaciones con la población, las instituciones del Estado y, ya para el final del periodo, con otros fenómenos como el narcotráfico. Y la segunda, está marcado por el aumento de la operatividad del Ejército y el retiro de los grupos paramilitares.

En la primera resulta importante resaltar cómo las acciones de los grupos guerrilleros, en especial la toma de poblaciones por parte de las FARC, el aumento en la extorsión y el secuestro, se tradujeron en un aumento del apoyo de sectores económicos y políticos hacia los paramilitares, quienes, a su vez, concentraron su accionar contra la población civil que acusaron de ser la base de apoyo de los grupos guerrilleros; esta situación se tradujo en el incremento de las violaciones de los derechos humanos. Una mención especial merece la confrontación entre las FARC y el ELN: como resultado de la misma, el ELN quedó debilitado y muchos de sus hombres engrosaron las filas de los grupos paramilitares, en especial las ACMM en la región de páramos y el BM en el municipio de San Carlos.

Por su parte, el aumento de la actividad del Ejército Nacional se corresponde con la desaparición de las ACMM y del BM, los cuales habían librado un periodo de guerra sucia, con el respectivo debilitamiento de las bases de apoyo y el desplazamiento de las poblaciones en las que las guerrillas hacían presencia.

Las operaciones militares se concentraron en el bombardeo de campamentos y en el despliegue de tropas de tierra que forzaron un repliegue de las guerrillas; este periodo de aumento de la actividad militar en las subregiones de bosques, páramos y embalses coincide con la entrada del Bloque Héroes de Granada y el inicio del tercer ciclo de la violencia, relacionado con la influencia del narcotráfico.

La vinculación de la denominada Oficina de Envigado, una reconocida estructura narcotraficante, con el BHG marcó, entonces, el tercer ciclo de violencia, el cual desplaza los índices de violación de los derechos humanos al altiplano y establece un nuevo escenario de confrontación, esta vez entre estructuras ligadas a las economías ilegales, microtráfico y narcotráfico.

Finalmente, la otra historia del Oriente antioqueño, la que se construye a contra renglón del conflicto armado, corresponde a las movilizaciones sociales, las organizaciones campesinas, obreras, de víctimas y de mujeres, que desde la civilidad han aportado a la construcción y, en muchas ocasiones, a la reconstrucción del territorio. Esta historia comenzó desde la década de 1960 con el movimiento cívico, que marcó profundamente el devenir de la región; en él participó especialmente Acaipa como referente de la movilización de las mujeres, factor fundamental en la movilización social regional. Los movimientos de víctimas, las organizaciones de mujeres, los jóvenes, las organizaciones de campesinos y los colectivos de defensa de los derechos humanos han retomado las banderas para la reconstrucción de una región en paz, democrática y empoderada de sus recursos naturales.

Referencias bibliográficas

- Agnew, J. y Oslender, U. (2010). Territorialidades superpuestas, soberanía en disputa: lecciones empíricas desde América Latina. *Tabula Rasa*, 13.
- Alonso, M. y Valencia, G. (2008). Balance del proceso de desmovilización, desarme y reinserción (DDR) de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada en la ciudad de Medellín. *Estudios Políticos*, 33, 11-34.
- Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH]. (2020). El resurgir del movimiento cívico del Oriente antioqueño.
- Conciudadanía. (2018). Un camino a la verdad, construcción de memoria colectiva de las víctimas del conflicto armado del municipio de San Luis.
- Duncan, G. (2013). *Los señores de la guerra: de paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia*. Debate.
- García, A. y Gómez, D. (2017). *Procesos organizativos de mujeres y víctimas del conflicto armado y sus relaciones con la democracia local en el Oriente antioqueño*. Universidad del Rosario.
- González Gil, A. (2017). *Del conflicto armado a la construcción de iniciativas para la paz territorial*. Universidad de Antioquia.
- Instituto Popular de Capacitación [IPC]. (2006). *Píldoras para la memoria: violación de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad en el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño*. IPC.
- Kaldor, M. (2001). *Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global*. Scielo.
- Munkler, H. (2005). *Viejas y nuevas guerras, asimetría y privatización de la violencia*. Editorial Siglo XXI.
- Olaya, C. (2016). El exterminio del movimiento cívico del Oriente antioqueño. *Revista Scielo*, 17(1).
- Ortiz, C. A. (2019). *Comunidades armadas en el Oriente antioqueño. El caso del ELN en la década del noventa en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia.
- Uribe, M. T. (2001). *Esfera pública-acción política y ciudadanía: una mirada desde Hanna Arendt*. Universidad de Antioquia.
- Verdad Abierta. (2014, febrero 8). Las FARC cosecharon odios en el Oriente antioqueño. <https://verdadabierta.com/las-farc-cosecharon-odios-en-el-oriente-antioqueño/>



Conciudadanía

Para que los derechos sean hechos

